
GCIAMT

Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional



COMITÉ DE EDUCACIÓN CONTINUADA

COORDINADORA: DRA CELINA MONTEMAYOR

PROGRAMA CONSULTA AL EXPERTO

COORDINADORA: DRA GRACIELA LEÓN DE GONZÁLEZ

**IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA POLÍTICA,
LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA**

PROFESOR INVITADO: ARMANDO CORTÉS BUELVAS

**Médico Especialista en Anatomía Patológica y Patología Clínica,
Gerencia en Salud y en Mercadeo Estratégico**

**Profesor titular del Departamento de Patología. Facultad de Salud.
Universidad del Valle. Cali, Colombia acortes59@gmail.com**

INTRODUCCIÓN

“Ha bastado el más pequeño elemento de la naturaleza, un virus, para que la humanidad recordara que es mortal y que la potencia militar y la tecnología no bastan para salvarla. La pandemia del coronavirus ha despertado a la humanidad del delirio de la omnipotencia” Fraile Capuchino Raniero Cantalamessa.

La COVID-19 ha generado una crisis para las que deberíamos haber estado preparados. Los expertos reconocían que una pandemia de este tipo era probable. Los brotes de SARS, MERS, H1N1 y ébola, entre otros, lo habían advertido. Hace quince años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó el marco global para responder a los brotes. En 2016, el Banco Mundial lanzó un Mecanismo de Financiamiento de Emergencia para Casos de Pandemia con el fin de ofrecer asistencia a los países de bajos ingresos frente a crisis sanitarias transfronterizas. Pocos meses antes de que apareciera la COVID-19, un informe del gobierno de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de una pandemia de gripe de gran magnitud. Es decir, la COVID-19 era una crisis anunciada. La actual crisis sanitaria, económica y social por la pandemia de la COVID-19, es la crisis de todas las crisis, porque en efecto, estamos todos en manos de una enfermedad que nos tomó desprotegidos por omisión, que apenas podemos describir sobre la marcha, que aún no controlamos y que además, influye no solo sobre el cuerpo humano sino sobre el cuerpo social. El acelerado contagio por COVID-19, el agravamiento promedio del 12% de los afectados y las tasas de mortalidad que oscilan entre 0,1% y el 15,8%, han sacudido los cimientos de los sistemas de salud, la ciencia médica, la innovación tecnológica y las instituciones de vigilancia en bioseguridad, que llevan sobre sí el reclamo social por soluciones seguras, económicas y oportunas, que permitan contener la expansión del contagio, salvar las vidas amenazadas y facilitar la recuperación de las economías en crisis. América Latina es una de las regiones del mundo donde el nuevo tipo de coronavirus ha tardado más en propagarse. El primer caso positivo del denominado síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) en la región fue hecho público en la ciudad de São Paulo, Brasil, el 25 de febrero de 2020. Pocos días después, las primeras infecciones fueron confirmadas en México, Ecuador y Chile, que desde entonces continuaron siendo algunas de las naciones más afectadas por esta pandemia en Latinoamérica. Brasil, el país más poblado de la región, es también el que cuenta con más casos confirmados de la enfermedad COVID-19, con más de dos millones de infectados y 80.000 defunciones según datos del 19 de julio de 2020. Un mes después de haber sido informado el primer caso, varios gobiernos de la región como los de Perú, El Salvador, Panamá, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, entre otros, empezaron a aplicar fuertes medidas de distanciamiento social y de restricción de la movilidad de los ciudadanos para evitar los contagios. Tres meses más tarde, sin embargo, cuando los países en Europa están levantando las limitaciones y comienzan a entrar en la nueva "normalidad", la mayor parte de los países de América Latina no solo están lejos de poder hacer lo mismo, sino que se han convertido en el nuevo epicentro de la pandemia. La

fuerza con la que irrumpió el coronavirus en Europa generó un fuerte temor entre los latinoamericanos que residían en el viejo continente, quienes optaron por regresar masivamente a sus países de origen y en algunos casos, trajeron el virus con ellos. De esa forma se recibió la primera ola importante de infectados. Las evaluaciones en los aeropuertos no son eficaces, porque hay muchos infectados que son asintomáticos, pero pueden transmitir el virus. Estas personas se reunían con sus familiares y amigos, lo que creó una primera ola de contagios y desde allí pasó a las comunidades. Con las medidas de cierre de la economía, también se daría un desplazamiento masivo de personas hacia otras zonas del país, donde hubo gran afectación y mortalidad. Entre los 15 países del mundo con mayor número de casos confirmados hay cinco latinoamericanos: Brasil, Perú, Chile, Ecuador y México, de acuerdo con cifras de la Universidad John Hopkins de EE.UU. actualizadas al 17 de julio. El incremento de nuevos contagios, de hecho, llevó a los gobiernos de Chile, Perú y Ecuador a extender nuevamente sus medidas de confinamiento. Estados como Paraguay, Uruguay y Costa Rica, que registran un número bajo de contagios confirmados y baja mortalidad, son excepciones a la tendencia general de la región que apunta al alza y aún están lejos del aplanamiento de la curva. El estado precario de la economía de los países latinoamericanos es un elemento central a la hora de explicar por qué en la región las duras medidas de confinamiento no han tenido los mismos resultados que en Europa. Estamos experimentando un aumento muy importante de casos en muchos países. Esto probablemente tiene que ver con los retos que enfrentan los países de América Latina con la pobreza, la economía informal y las dificultades para aplicar las medidas de distanciamiento social. Las medidas de confinamiento son muy difíciles de cumplir en América Latina. Muchos de los empleos son informales y la gente no se puede quedar en su casa a esperar a que les llegue el salario. Al mismo tiempo, los gobiernos de la región no tienen la capacidad para sostener económicamente a la población como ocurre en otras partes del mundo. Paradójicamente el pago de una ayuda social a las familias más pobres pudo haber contribuido a la expansión de los contagios, al acudir a sucursales bancarias para hacer efectivo el cobro. Los grandes mercados populares también se convirtieron en centros de contagio pues los trabajadores informales -sin ahorros para quedarse en casa- debían salir cada día a trabajar, pero también a comprar lo que necesitaban y en esas grandes aglomeraciones se infectaban y luego contagiaban a sus familias. El problema, claro está, es que para esas poblaciones necesitadas quedarse en casa tampoco es una realidad posible.

POLÍTICA Y PANDEMIA

PAPEL DE LOS ESTADOS

La primera enseñanza en esta crisis, es la conciencia sobre la importancia del papel del Estado, sus instituciones y sus servicios, como garantes y protectores de los derechos fundamentales, la defensa y el respeto del individuo y el reconocimiento de la dignidad humana, la protección de la vida y de la solidaridad como valores fundantes de la sociedad. La doctrina económica vigente, ha llevado a la privatización de los derechos sociales convertidos en servicios al vaivén de la oferta y la demanda y del mercado, y a la reducción de la inversión social en salud y educación; y el empleo pleno con millones de

personas en el mundo en la precariedad, sin acceso a salud, educación, agua potable, vivienda ni educación; entre otros. El Estado, suplantado por las corporaciones privadas, reemplazado por los organismos internacionales y minado en su autoridad interna debe revitalizarse, para enfrentar amenazas como la actual y atender las consecuencias económicas y sociales de una crisis de grandes proporciones, porque ha quedado demostrado que, aun en situaciones de emergencia, el sector privado sigue pensando en sus utilidades y los ciudadanos solo tienen como motor la solidaridad, pero esta es insuficiente ante la magnitud de la catástrofe. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población son finalidades sociales del Estado. El Estado está obligado a proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Hay que asegurar a los integrantes de la sociedad la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, que garantice un orden político, económico y social justo, además, el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. El Estado está obligado a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, como en la grave, difícil y angustiosa situación actual para millones de personas.

CRISIS DE LIDERAZGO

La actitud de los gobernantes frente a la pandemia es fundamental, y los ejemplos extremos de esto los representan los gobernantes que han asumido una práctica política ampliamente fundamentada en la ciencia, y reconociendo que el nivel de conocimiento científico aún es escaso e incluso contradictorio y han logrado conducir con prudencia y responsabilidad la crisis, con lo cual sus niveles de contagio y mortalidad son un éxito relativo; en contraparte, están los gobernantes quienes han despreciado a la ciencia, y han oscilado entre la negación de la gravedad, a decir que no hay nada que hacer, y que es natural que miles mueran; le han apostado a la economía y no a la vida, no sólo se han encargado de torpedear las medidas de confinamiento y cuidado necesarias, sino a recomendar a los ciudadanos medidas descabelladas que ponen en riesgo la salud con escandalosos niveles de mortalidad en sus países y lo errático de las políticas para enfrentarlos; teniendo una gran responsabilidad por esas muertes, llevando a sus países cerca de una crisis humanitaria sin precedentes. Ante la extensión de la pandemia, los Gobiernos latinoamericanos se han visto obligados a tomar medidas para desacelerar el contagio de la COVID-19 entre sus ciudadanos. Estas restricciones varían de país a país e incluyen desde el cierre temporal de fronteras hasta la paralización total de las actividades económicas y sociales no esenciales. La mayor parte de los gobiernos de América Latina fueron diligentes en la aplicación de confinamientos forzados para evitar la propagación del virus. Sin embargo, para que estas medidas resulten plenamente eficaces deben usarse en el momento adecuado; por ejemplo, países como Brasil y México tomaron estas medidas de forma tardía; pero también hubo otros que las quisieron aplicar cuando en la región apenas la situación estaba en etapa incipiente. Y ahora se quiere hacer el desconfinamiento muy tempranamente. Esta crisis ha demandado la necesidad de líderes con capacidad, legitimidad, legalidad o fuerza, para tomar las riendas y tomar las buenas o

malas decisiones que se hayan de tomar, para enfrentar el temporal, entenderlo y aplicar las estrategias que se requieren para minimizar sus impactos. Es en las crisis donde se conoce de verdad el talante, la fuerza interior, el buen juicio, la voluntad, el arrojo, la capacidad de convocatoria y el verdadero liderazgo para tomar decisiones y formular estrategias en medio de la confusión generalizada y de vislumbrar y dirigir la reconstrucción. La inadecuada o tardía respuesta abocó en algunos a una importante escasez de kits de pruebas, mascarillas, respiradores, otros suministros médicos y a no disponer de pruebas confiables o entrar en enfrentamientos y competencia con otros países para garantizar los suministros. Las demoras en los testeos y en los confinamientos han sido costosas y se ha pagado un alto precio. El problema es que para hacer pruebas moleculares se necesita infraestructura y una logística que no se puede superar en pocos meses. Mantener a la población bien informada con mensajes claros y coherentes es un elemento fundamental para que la lucha contra la pandemia funcione. Sin embargo, al parecer, ese no siempre ha sido el caso, hay muchas personas que no saben cómo usar las mascarillas o lo hacen de forma descuidada, por lo que estas no cumplen su función. Lo mismo vale para las instrucciones relacionadas con la necesidad de guardar distanciamiento social o de evitar aglomeraciones, pues muchas personas siguen haciendo reuniones con sus familiares y amigos. En algunos países, han sido las propias autoridades las que han transmitido un mensaje desacertado, minimizando el virus y con mensajes equívocos, como en Brasil. Algunos países han respondido mucho mejor. Y parecen haber controlado la propagación de la enfermedad a través de una combinación de testeos, rastreo y políticas de cuarentena estrictas, la imposición más temprana de restricciones de viajes, la celeridad para declarar un estado de emergencia y cerrar las instalaciones públicas y la presencia de una confianza pública significativa. Otros han basado su respuesta en un alto grado de control social y una gigantesca movilización de recursos; y algunos han capitalizado la crisis afianzando el poder del dignatario para disolver el parlamento y otorgarse poderes de emergencia sin límite de tiempo. A pesar de que la mayoría de los sistemas de salud pública en América Latina estaban habituados a hacer frente a epidemias estacionales como el dengue, el virus del Zika o la chikunguña, los habitantes de la región no se muestran muy optimistas en cuanto a la forma en la que sus gobiernos están manejando la situación.

LA GLOBALIZACIÓN

La globalización obviamente asume un orden internacional político cooperativo, o al menos pacífico. Al enfrentar a la COVID-19, la mayoría de los gobiernos han fallado en cooperar con otros, y en vez de esto, han decidido seguir cada quien por sí mismo. El juego de culpas entre China y Estados Unidos se mantiene por haber causado la pandemia o por haber convertido una crisis de salud en una política. La pandemia parece haber exacerbado las tensiones entre las dos potencias mundiales. Más allá de esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se supone debe ser la base de la cooperación internacional en estos tiempos de crisis, se ha convertido también en un tema de disputa. Muchos culpan a la organización por encubrir el inicial manejo erróneo del brote de Pekín y no implementar una respuesta firme en los primeros días que diera frente a los daños potenciales. Recientemente, Estados Unidos incluso suspendió su

financiación a la organización. Entre tanto, continúa la lucha de los países por el suministro limitado de equipo vital de protección personal. Muchos países han prohibido la exportación de máscaras y respiradores y de varias medicinas críticas; lo que ha llevado a la confrontación entre gobiernos. Es en estos momentos de crisis cuando es fundamental la acción colectiva global para dar respuesta a la amenaza que se cierne sobre el mundo; hasta la fecha, los líderes mundiales han hecho alarmantemente poco para mitigar la crisis. Esta es una pandemia que puede remodelar la geopolítica de la globalización. El problema de la globalización es que esta interconexión entre economías y países, es una gran forma de lograr un equilibrio, pero la economía mundial está tan entrelazada y los países tan independientes, que el rompimiento de un solo vínculo en la cadena aparentemente es suficiente para que se desencadene una enorme crisis. Cuando llegó el virus a China por primera vez, dos tercios de toda la economía China se paralizó, lo que durante semanas, llevó a una escasez de suministros en el mundo. Con la globalización, las firmas multinacionales han extendido sus líneas de producción alrededor del mundo, aprovechando la ventaja de mano de obra más económica y menos impuestos. Ahora los legisladores y empresarios se cuestionan si los riesgos de una producción globalizada sobrepasan sus beneficios. La COVID-19 como amenaza transnacional incontrolable necesita de una acción colectiva global. El mundo nunca antes se había enfrentado a una crisis como esta, que está testando simultáneamente los límites de los sistemas de salud pública en todas partes y la capacidad de los países para trabajar juntos en un desafío compartido. El nuevo coronavirus se perfila como una enorme prueba de estrés para la globalización que, en sí misma, ha permitido una rápida propagación de la enfermedad y que, a su vez, muestra la fragilidad y vulnerabilidad del sistema, de la economía global interconectada, conforme las cadenas de suministro críticas se rompen y las naciones cierran sus fronteras.

CONCERTACIÓN Y COOPERACIÓN

Es necesario comprometerse en un gran pacto social que permita superar esta crisis y generar alternativas de largo plazo. Un acuerdo que integre a todos los sectores sociales y a los gremios económicos, con el liderazgo de los gobernantes como impulsores de concertación y diálogos en un escenario para debatir, definir y precisar los cambios fundamentales que requiere el modelo económico, para construir alternativas que permitan alcanzar mejores niveles de equidad social, y una afronta certera contra el hambre y la miseria; acabar con la informalidad laboral, recuperar los niveles de empleo y construir políticas justas de distribución del ingreso. No se puede continuar en medio de una inédita situación de crisis mundial con algunos empresarios y dirigentes sacando provecho y apoyando reformas laborales, pensionales y económicas. El objetivo último es salvaguardar, en la medida de lo posible, el bienestar económico de la población y la capacidad productiva. En algún momento será inevitable que los países trabajen juntos para recuperar la economía. El esfuerzo de reconstrucción necesariamente tiene que ser cooperativo, y tendrá que haber algún tipo de coordinación internacional. Es fundamental la cooperación internacional y el reto de acabar con las tensiones comerciales para que baje de una vez la incertidumbre inversora. Retomar un diálogo constructivo sobre el comercio aumentaría la confianza de las empresas y el apetito para las inversiones. De

esta crisis se debe salir con una estrategia común, estimuladora de la demanda y garante de la capacidad productiva de las empresas; cualquier otro escenario está abocado a serias dificultades en el corto y medio plazo. No todos los países tienen la misma capacidad de respuesta por lo que es necesario que los estados más desarrollados, aunque puedan estar igualmente afectados, colaboren e implementen medidas de ayuda a los países con menos recursos. La pandemia llama a la necesidad de que Estados Unidos y China se pongan de acuerdo para gestionar esta crisis de salud mundial, se olviden de sus enfrentamientos de poder y se unan a los países de la Unión Europea y los otros países desarrollados del G20 para buscar soluciones efectivas. Posteriormente, una vez controlada la pandemia, es necesario que se continúe trabajando en los efectos colaterales, más allá de la salud, generados por el coronavirus para evitar que la crisis económica y social en la que puede convertirse no degeneren en un conflicto de mayores consecuencias para todos ni en una mayor confrontación geopolítica y económica. Los países latinoamericanos necesitan una acción conjunta por parte de las instituciones financieras internacionales y de las calificadoras de riesgo, para evitar que continúe el aumento de la pobreza y la desigualdad. Tanto las empresas que operan a nivel mundial como las locales deben afrontar el reto de gestionar esta interrupción de la cadena de suministro, realizando cálculos de la eficiencia económica en función del riesgo por parte de cada empresa. El mundo, en definitiva, va a cambiar, y está en nuestras manos decidir si una crisis, además de generar amenazas, es también una fuente de oportunidades.

MODELO ECONÓMICO Y GOBERNANZA

El modelo económico se ha encargado de debilitar las instituciones necesarias para responder a una coyuntura como la actual: sistemas de salud, organizaciones multilaterales, investigación científica, educación de calidad y formación profesional basada en los principios de la educación liberal. Los mercados tienen prioridades que no tienen que ver con los intereses de la mayor parte de la población mundial, de manera que por sí solos no pueden manejar las crisis actuales y menos prepararnos para las futuras. Sin duda la globalización trajo consigo muchos beneficios: comercio, tecnologías nuevas, ideas, inversión y turismo. Hay quienes a su vez la ven como una herramienta destructiva: el cambio climático, el terrorismo y la propia pandemia que ha exacerbado la globalización. Con este panorama, es necesario avanzar en propuestas de gobernanza global como un camino acertado hacia la convivencia universal y plantea la exigencia de reconfigurar el poder en la esfera de lo público y lograr la convivencia y justicia social. La crisis parece haber puesto aún más de relieve las características dominantes de la política de cada país. En efecto, los países se han convertido en versiones exageradas de sí mismos. Esto sugiere que la crisis tal vez no sea el punto de inflexión en la política y en la economía global que muchos auguraban. En lugar de colocar al mundo en una trayectoria significativamente diferente, es probable que intensifique y afiance las tendencias ya existentes y no se avance hacia el orden económico y político futuro que venimos añorando desde hace mucho tiempo. Así las cosas, quienes quieren más gobierno y bienes públicos tendrán infinidad de razones para pensar que la crisis justifica su creencia. Y quienes son escépticos del gobierno y denuncian su incompetencia también verán confirmadas sus opiniones previas. Quienes quieren más gobernanza global plantearán el

argumento de que una salud de régimen público internacional más fuerte podría haber reducido los costos de la pandemia. Y otros se quedarán simplemente señalando las equivocaciones al parecer de la OMS en la gestión tardía o equivocada de su respuesta o de oponerse a las restricciones de viajes y desalentando el uso de mascarillas, etc. En resumen, la COVID-19 tal vez no altere —y mucho menos revierta— las tendencias evidentes antes de la crisis. El neoliberalismo seguirá su muerte lenta. Los autócratas populistas se volverán aún más autoritarios. La hiperglobalización continuará a la defensiva mientras los estados-nación reclaman espacio para implementar políticas. China y Estados Unidos se mantendrán en su curso de colisión. Y la batalla dentro de los estados-nación entre oligarcas, populistas autoritarios e internacionalistas liberales se intensificará, mientras la izquierda lucha por diseñar un programa que apele a una mayoría de votantes. En consecuencia, necesitamos una gobernanza de todo el planeta, es decir, global. Ahora sabemos que las decisiones individuales de cada Estado no son la solución a los problemas universales. Pero también es necesaria una poligobernanza en la que, además de los poderes públicos, participen las empresas y la sociedad civil; jurisdicciones constitucional y administrativa fuertes, con capacidad y respaldo suficiente para equilibrar el ejercicio del poder en la sociedad, para ponderar el alcance de la intervención de las autoridades, y para impedir que el ejercicio del poder se concentre en unas pocas manos, garantizar la protección de diferentes derechos fundamentales, el desarrollo económico y social, la protección de la vida y la libertad, dentro de un complejo sistema de fuerzas que hacen posible la existencia del Estado Social de Derecho. No sería extraño que durante los próximos meses o años asistamos a la muerte política y la muerte moral de muchos dirigentes que optarán por seguir haciendo política de forma tradicional, sin haber dado lectura inteligente de las sensibilidades ciudadanas. La política también tiene una oportunidad para reinventarse o —por el contrario— continuar en el descrédito y el hastío que viene caracterizando el clima de opinión hacia la política en los últimos años. Es una oportunidad para que la humanidad despierte de su letargo y deje de poner su atención en líderes y acciones banales y superficiales; y se enfoque en quienes gobiernan con responsabilidad y sus acciones son percibidas como colectivas en medio de la crisis, es ver con otros ojos un aspecto vital que colapsa y debería ser el foco principal de cualquier esfuerzo de la sociedad, las empresas y los gobiernos: la profunda inequidad, que afecta la dignidad humana. Es importante que quienes toman las decisiones busquen juntos el bien del país y no el bien particular. El ejercicio gubernamental también debe cambiar en la forma de planear, actuar y comunicar y demanda la comprensión de las dinámicas del Estado y la participación ciudadana con transparencia y la cooperación internacional. La humanidad necesita gobernantes y líderes que posibiliten la convivencia civilizada y avanzar en niveles de progreso económico y social para que los seres humanos vivan dignamente. Las democracias establecidas, tendrán que sacar ideas y propuestas, para evitar que la tentación de los totalitarismos, se apropien del escenario social, político y económico, con los ciclos y consecuencias vividos. La democracia tiene que considerar la suerte definitiva de la república entre democracia y totalitarismo, entre libertad y colectivismo, entre civilización y barbarie. Por otro lado, la gravedad de la crisis de la salud puede desbordar la capacidad de respuesta de los gobiernos. El número de víctimas resultante minaría la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. Además, si la

crisis de la salud deja a su paso una profunda recesión económica, con desempleo masivo y medidas de austeridad, la confianza en las instituciones actuales puede sufrir un nuevo golpe. Como aspecto positivo, la crisis actual puede ayudar a restaurar el valor de la competencia y la honestidad en la política democrática. A medida que la pandemia de la Covid-19 ejerce una presión aún mayor sobre las economías y las sociedades, ya de por sí frágiles, es posible que la frustración de los ciudadanos con la democracia aumente todavía más. O por el contrario, esto podría brindarles la oportunidad de apoyar a funcionarios públicos competentes. En medio de enormes desafíos, los líderes electos de la región deben hacer todo lo posible para contener la crisis de la salud y proporcionar alivio económico, manteniendo a la vez un firme compromiso de proteger las instituciones democráticas de sus países: elecciones justas, controles y equilibrios, tribunales imparciales y medios de comunicación independientes. Los ciudadanos deben seguir estando informados y hacer oír su voz en las elecciones y mediante su participación en la sociedad civil. La prosperidad de la región a largo plazo dependerá no solo de contar con economías sanas sino con democracias igualmente sanas. Los países en desarrollo, como los de América Latina y el Caribe, no solo tienen economías más débiles, sino también democracias más frágiles. La crisis podría desestabilizar las prácticas democráticas, desde el voto y las protestas hasta los derechos civiles, y, en última instancia, afectar la confianza en las propias instituciones democráticas. La pandemia está acelerando una tendencia muy avanzada hacia balcanización y la fragmentación. Los líderes populistas trataran de sacar provecho de la debilidad económica, el desempleo a gran escala y el aumento del desempleo y la desigualdad. En condiciones de mayor incertidumbre económica hay un fuerte impulso a echar la culpa a extranjeros, a los ricos, a trabajadores industriales y grandes franjas de la clase media se volverán más permeables a la retórica populista en particular a restringir las migraciones y el comercio.

LA SALUD

La debilidad del estado de bienestar no llevó de cara a la propagación de un nuevo virus, en todos los continentes, y nos reveló la carencia de sistemas de salud bien dotados de recursos humanos y de equipos técnicos para atender una enfermedad desconocida y fácilmente transmisible. Casi todos los Estados tuvieron que asumir la crisis con un sistema de salud sin capacidad de respuesta y sin recursos; invariablemente decretaron el confinamiento obligatorio de la población y el cierre de fronteras para frenar la expansión de la infección, como táctica para ganar tiempo, mientras se adecuaban los centros hospitalarios y se instalaban las unidades de cuidados intensivos, se contrataba o preparaba el personal sanitario y se adquirían los equipos necesarios, aplanando la curva de contagios para evitar el colapso de los hospitales. La pandemia pone en evidencia el terrible impacto que ha tenido aún en los países europeos y en Norteamérica el desmantelamiento del sistema público de salud. Miles han muerto como consecuencia de la privatización del acceso a la salud como derecho, y los sistemas privados de salud demuestran que no están diseñados para atender emergencias en gran escala. Las cifras son preocupantes, el manejo de los países ha sido muy desigual que llevará irremediablemente a un manejo “estanco” del problema cuando debiera ser mundial. La divergencia en el número de muertos y la forma en que la pandemia fraccionó y volvió

estancos, con países con mayor mortalidad, otros con relativa estabilidad y pocos en los cuales está decreciendo. La prevención en salud siempre es más rentable, pero se trabaja poco. El día que le demos más importancia a la prevención, seremos una sociedad madura y desarrollada, pero para lograrlo necesitamos programas educativos permanentes. La rentabilidad social de la prevención en salud la pone en evidencia la pandemia de la COVID-19, que afecta en mayor proporción a las personas que tienen enfermedades previas. La salud es muy costosa y en algunos hay que sumar los costos de la corrupción y de la privatización, que encarece tratamientos y medicamentos. Un día de UCI implica costos que en ningún país pueden asumir los trabajadores o la clase media y si la sanidad es privada, la gente debe comprar un seguro médico que una buena parte de las familias no puede pagar. Por esa razón, muchas personas no van a los hospitales, aunque se sientan enfermas. Es más barato prevenir que enfermarse. Frente a la impotencia de la ciencia en la medida de la magnitud de la crisis y de la sorpresa, se trata de predecir el futuro mediante razonamiento algorítmico y modelos matemáticos para inducir el futuro en la medida en que se gestione, controle e induzca el presente. La responsabilidad de su control se transfiere de los políticos a la racionalidad científica, representada en este caso por la Salud Pública y las Ciencias Médicas, que en tiempos normales son casi inocuas para el poder político y económico. Ante el inminente y muy factible riesgo de muerte, todos al igual que la ciencia, esperamos que ocurra el milagro científico; mientras la soberanía de la capacidad de decisión política está en manos de una especie de comité de crisis que aparece al lado de casi todos los gobernantes. La crisis ocasionada por la COVID-19 ha afectado a diferentes sectores, el primero de ellos es el sector de prestación de servicios de salud. Dada la velocidad de expansión del virus, las clínicas y hospitales se han visto obligados a cambiar su operación, tomando medidas, para poder atender los incrementos en la demanda que se está presentando. Esto implica, reducir su capacidad de atención en servicios electivos programados, generando la reducción de su flujo de caja por la postergación de estos procedimientos que son fuente importante de los ingresos, y acumulación de inventario de medicamentos, dispositivos y equipos que se requerían para esos procedimientos, que ya no se demandan, pero sobre los cuales tienen compromisos de pago con los proveedores. Estas dos circunstancias afectan su supervivencia financiera. Por otro lado, los hospitales se han enfrentado a situaciones menos visibles que afectan la adecuada atención, como el cierre de las fábricas en China que ocasionó que los despachos de dispositivos médicos y materias primas al resto del mundo se estancaran y con el cierre de fronteras se complicó la distribución de dispositivos de vital importancia para atender a los pacientes. Es así, como elementos de consumo que, normalmente eran de uso moderado, empezara a requerirse en cantidades que superan los estimados de demanda (overoles, mascarillas, batas anti-fluidos, gafas, caretas, guantes y otros insumos y equipos biomédicos, incluyendo respiradores) escaseando ante la elevada demanda. En términos de acceso a materiales de laboratorio, respiradores y equipos de protección personal América Latina enfrenta una dificultad adicional debido a que debe importar estos insumos. Y en el contexto de una pandemia global, la región tuvo que competir con países que no solamente disponen de una mayor capacidad financiera sino además que tienen el poder de prohibirle a las empresas fabricantes la exportación de estos bienes. Al presentarse escasez de elementos de protección personal (EPP) los hospitales se ven en la

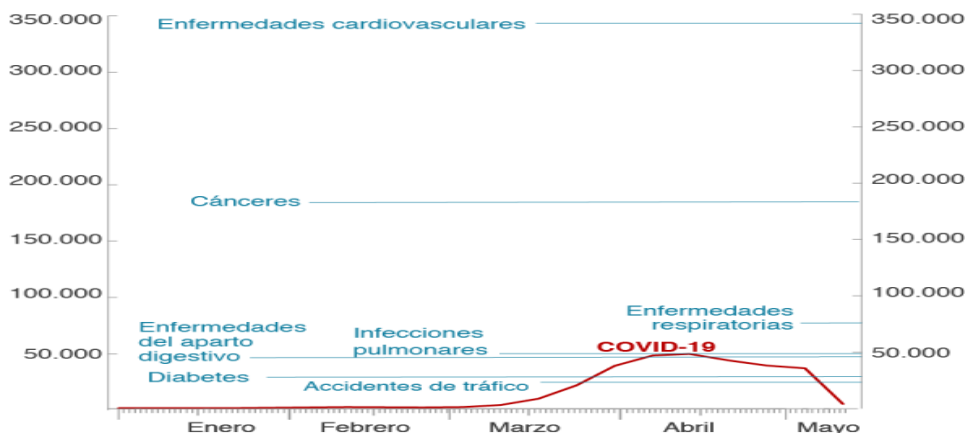
obligación de optimizar el uso de estos recursos y proteger al máximo su personal en el contacto con los pacientes, por lo que la prestación del servicio se complica. La desprotección del personal de salud ocasiona infecciones, incapacidades, reducción del personal disponible y desafortunados fallecimientos. Asociado a lo anterior, empresas sin escrúpulos acapararon esos elementos, les subieron los precios y solo lo vendían a quien comprara cierto volumen y con pago anticipado. Por otro lado, aparecen oferentes ficticios o proveedores que disfrazan otras actividades; ante la escasez de equipos médicos por parte de fabricantes reconocidos que terminan siendo adquiridos por países que hacen la mejor oferta, dejando al resto de países con la única opción de comprar marcas sin reconocimiento en el mercado. Es posible que esto continúe sucediendo sin que se hayan controlado esos abusos en algunos países. No solo hay dificultades con la falta de respiradores, es también la falta de personal especializado para las unidades de cuidado intensivo. Las unidades de cuidados intensivos (UCIs) no son solo aparatos, sino también un equipo humano. De nada sirve tener todas las camas y los equipos si no está el médico especialista junto con un equipo de enfermeros y auxiliares también especializados, dispuestos con cada paciente las 24 horas que se debate entre la vida y la muerte. La mortalidad en estas salas varía; en algunos países, la tasa está entre el 25 al 80 por ciento; pero el promedio general está entre 50 y 60 por ciento. Detrás de ese desenlace hay varios factores como la edad, las comorbilidades del paciente y sus reservas biológicas. Pero también incide el acceso a las UCIs. En los países con mayor número de fallecimientos hay más demanda que disponibilidad y los médicos se ven forzados a decidir a quién tratar de salvar y a quién no. La disponibilidad de camas en UCIs es el eslabón crítico para tratar a los contagiados. Y si las UCIs no cuentan con el personal idóneo es igual a no tenerlas. Además, ellos luchan en el primer frente de batalla, por lo que tienen un mayor riesgo de infectarse, enfermarse y agravarse por COVID-19. Y si alguno falta por cuarentena, la UCI perdería su capacidad funcional. Muchos pacientes que hoy se rehúsan a ir a las UCIs, y prefieren irse a sus casas, pueden morir horas después o llegar más tarde a consultar y eso también puede llevar a que las UCIs se llenen de manera desmedida. Aunque muchos gobiernos latinoamericanos utilizaron los confinamientos para ganar tiempo y tratar de poner a punto sus sistemas de salud -en muchos casos pobremente dotados- se trataba de un objetivo difícil de lograr. Hay países que han fortalecido su capacidad hospitalaria y diagnóstica, otros no han podido adaptarse a la velocidad a la que está creciendo el virus y no están haciendo la cantidad de pruebas que se esperarían. En algunos países los hospitales y clínicas están afrontando la peor crisis de nuestra historia por cuenta de una cartera asfixiada de deudas; enfrentados a la corrupción, la inoperancia y la desidia gubernamental. Los deudores, incumplen sus fechas de pago, persisten morosos, e incluye empresas de salud, gobierno y sus entidades y compañías de seguros, sin saber con exactitud su cancelación. ¿Cómo puede sobrevivir de esta forma un hospital?, ¿cómo hace para comprar EPP, medicamentos y pagar al personal asistencial y administrativo?. Desde la aparición de la infección por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad causada por el mismo, la COVID-19, y teniendo en cuenta que un grupo de personas contagiadas se pueden complicar de forma severa, se inició la búsqueda de medicamentos efectivos que ayudaran a mitigar la enfermedad y que incluso, pudieran disminuir la mortalidad. Con esta premisa y ayudado por la diferencia

cronológica en la propagación de la pandemia, el afán de publicación de las revistas científicas y de los mismos medios de comunicación, y el interés colectivo de ayudar a un tratamiento efectivo de la población a través de las redes sociales, ha llevado a que se generen expectativas muchas veces infundadas o a sacarse conclusiones muy prematuras. Aún falta la información de una investigación bien diseñada (ensayo clínico, aleatorizado) y con suficiente número de pacientes para conocer realmente si tienen seguridad y utilidad o no para el manejo de la COVID-19. A pesar de la gran cantidad de información que circula en redes sociales e incluso en publicaciones científicas, a la fecha no hay un medicamento que haya mostrado ser efectivo de una forma concluyente. La vacuna podría devolver el optimismo, la vida pública, la fe en la ciencia y en la educación con calidad, en un futuro basado en el conocimiento y en la política basada en la racionalidad científica. La vacuna contra el COVID-19 tendrá que ser compartida con toda la humanidad porque sería inaceptable que semejante crisis sea fuente de millonarias ganancias para los propietarios de la patente. Son muchos los países y las multinacionales que están trabajando a marchas forzadas para tener la vacuna este mismo año. También preocupa si traerá la solución. Se afirma que será muy costosa, que se destinará inicialmente a países del primer mundo y que su producción y distribución será muy lenta y que vacunar a todo el planeta no se tomará años sino décadas. Nadie aceptará que, en medio de semejante crisis, esta vacuna ostente derechos de propiedad intelectual y debiera ser compartida con toda la humanidad y permitir su producción en todo el mundo. A pesar de los grandes esfuerzos científicos todavía parecen lejanos el hallazgo y producción de una vacuna, o una serie de ellas, que pueda inmunizar a la población; y la identificación de tratamientos seguros para los pacientes que reduzcan los tiempos de enfermedad, las consecuencias secundarias y la mortalidad. Aunque solo estamos en la primera mitad de 2020, el COVID-19 está en camino de convertirse en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. La pandemia ha matado hasta el 20 de julio, a más de 600.000 personas en todo el mundo. Sin embargo, el número puede estar muy por debajo del real, debido al subregistro causado por muchos factores: por ejemplo, la falta de pruebas en varios países; tan solo en Brasil, por ejemplo, las proyecciones hechas por grupos de investigación dicen que el número de casos reales de COVID-19 puede ser de 12 a 16 veces mayor que el número oficial. En muchos países, los registros oficiales de defunción solo cuentan a aquellos que mueren en hospitales o que han dado positivo en las pruebas. Las muertes sin un diagnóstico preciso y las que ocurrieron en domicilios o en hogares de ancianos, por ejemplo, no siempre ingresan a las estadísticas de inmediato. Además, los expertos en análisis de datos advierten sobre el "efecto indirecto o secundario" que la COVID-19 puede tener sobre las causas más comunes de muerte, como por ejemplo el cáncer; es decir el impacto que esta pandemia está teniendo en otras causas de muerte. Puede presentarse en personas que no buscan atención médica, sistemas de salud que han excedido su capacidad, falta de acceso a tratamientos o reducciones en la financiación. Por ejemplo, en muchos países hay personas que no están recibiendo tratamiento para las enfermedades cardiovasculares debido a la cuarentena y a la sobrecarga de los sistemas de salud. El efecto indirecto de la pandemia en otras causas de muerte aún es modesto, de acuerdo con los datos disponibles en tiempo real. Si pensamos en el largo plazo, el impacto de la pandemia - como la interrupción de los servicios de salud y que muchas personas entrarán en la pobreza - se reflejará en la mortalidad. Como ese efecto indirecto de la COVID-19 no estará explícito en los certificados de defunción, solo la causa principal de

muerte, hay que encontrar otras maneras de cuantificarlo. El escenario que vemos ahora apunta a la posibilidad de que la COVID-19 esté entre las principales causas de muerte de 2020, pero solo estaremos seguros en algunos años, cuando tengamos los datos

Muertes por COVID-19 vs. otras causas en el mundo

Comparación entre las muertes semanales actuales por coronavirus y la media de defunciones semanales por otras causas en 2017*



Fuente: IHME, Global Burden of Disease, Johns Hopkins University- Datos al 11/05/2020 **BBC**

Sin embargo, cualquier comparación se ve obstaculizada por el subregistro, un problema que ocurre en todos los países, en mayor o menor medida. Como se puede ver en el gráfico arriba, ha superado el promedio de muertes causadas en 2017 por diabetes, accidentes de tráfico y enfermedades del aparato digestivo en todo el mundo, dejando atrás problemas como la tuberculosis, el VIH y la malaria. Como puede verse en la gráfica, el covid-19 podría acercarse al décimo lugar de las mayores causas de muerte en este año 2020, lo que demuestra que no es cierto que sea una simple gripa o que muere más gente de hambre. Pero tampoco es la gran plaga que va a acabar con la humanidad. Claro que hay que ponderar el hecho de que este coronavirus ha cobrado 600.000 vidas en medio año a pesar de todas las medidas que se han tomado, llegando al extremo de paralizar casi al mundo entero. Seguramente sin el confinamiento y las medidas de bioseguridad serían muchas más las víctimas y amenazaría los primeros puestos del listado. No obstante, todas las pandemias se han ido tan súbitamente como han llegado; todas han sido fenómenos pasajeros, algunas han dejado una mortandad infinitamente superior a la del COVID-19, y han desaparecido en cuestión de meses. Por eso muchos se siguen preguntando si ha valido la pena un confinamiento tan estricto que ha provocado tantas pérdidas económicas y un grave retroceso en materia de pobreza que va a dar al traste con los avances que países alcanzaron tras muchos esfuerzos a lo largo de varias décadas. Y es que, al parecer, está triunfando la tesis de expertos que adujeron que daba igual si se cerraba la economía o no, porque de todas maneras era necesario que se contagiaran muchos para adquirir la inmunidad de rebaño, pero que hacerlo lento con un cierre estricto iba a incidir negativamente en el estado de la economía. Hay países que han llegado a niveles de entre 800 y 1.000 muertos diarios durante dos o tres semanas antes

de doblar la curva y empezar a descender. No sabemos cuánto tiempo estará el virus con nosotros, aún no sabemos si realmente se desarrolla inmunidad duradera. Los estudios sugieren que se desarrollan anticuerpos neutralizantes, pero como se ha visto con otros coronavirus puede ser un tipo de protección temporal, hasta que no tengamos más datos no estaremos seguros. De igual manera no sabemos qué pasará con las vacunas. Esperemos que podamos encontrar una, en lo posible antes de que termine el año y, cuando se tenga, habrá ocho mil millones de personas que la querrán el mismo día. Nos va a llevar años hacer suficiente para todo el mundo. El gran desafío es tratar de entender qué podemos y debemos hacer con este virus. En países como Estados Unidos, España y Francia hay datos que señalan que del cinco al diez por ciento de la población lo ha tenido, pero en su conjunto todavía no es una población altamente infectada. Eso significa que, potencialmente, va a llevar meses o años antes de que alcance el 60 o 70 por ciento de la población, que es cuando se llegaría a la inmunidad de rebaño, algunos piensan que con solo 40% será suficiente. Si logramos una vacuna sería ideal, porque se puede alcanzar esa inmunidad sin pasar la enfermedad, pero si no la tenemos, vamos a seguir viendo muchos casos. El mundo no puede estar manejando esto como si ya casi hubiéramos terminado. Hemos pasado por esta primera ola, el número de casos está bajando en muchos lugares; pero, aunque este no es un virus de la gripe, ha actuado de una forma parecida y, si nos fijamos en las pandemias de gripe, a menudo duran dos o tres años, llegan oleadas, a veces separadas por varios meses sin actividad aparente. Este virus opera bajo tres principios: las leyes de la química, las de la física y las de la biología, y ninguna persuasión política, ninguna declaración de ningún líder, ningún deseo ni esperanza cambiará eso. Una de las cosas realmente importantes es que esta es una pandemia de coronavirus, es una, pero es también parte del elenco que podrán hacer lo mismo una y otra vez. No podemos quedarnos con el hecho de haberla controlado y ahora esperar cien años a que suceda otra vez, este no es el caso. Es posible que dentro de un año, dos, tres, pudiéramos tener una grave pandemia de gripe. Hay que entender que tenemos que estar preparados para las pandemias de una manera que no lo estamos. Podemos decir que, potencialmente, tendremos otras pandemias de coronavirus en el futuro y, por eso, tenemos que aprender de esta. Necesitamos una nueva vacuna o vacunas contra la gripe que funcionen mejor. La esperanza es que veamos una especie de renacimiento en el trabajo sobre vacunas, que anticipe dónde están los virus realmente serios y desafiantes que pueden venir de los animales para reducir la posibilidad que tengamos que sufrir otra pandemia como esta. Por otra parte, ahora somos más conscientes de que la ciencia y la investigación son imprescindibles para nuestro futuro como especie y, por tanto, no podemos escatimar nada a la hora de dotarlas con todos los medios necesarios.

Se ha hecho evidente que una cobertura social y sanitaria insuficiente no sólo conlleva riesgo para los países afectados, sino para toda la comunidad internacional. Habida cuenta de ello, se debe ofrecer apoyo internacional a los países a la mayor brevedad posible, con objeto de que puedan adoptar medidas con carácter urgente para aumentar la capacidad de sus sistemas sanitarios y de protección social, así como garantizar el acceso a la asistencia sanitaria y el mantenimiento de los ingresos. Hay valiosos aprendizajes del sistema de salud y buena parte de la sociedad para atender el contagio y respetar las

normas de autocuidado. Es importante, que también se ventile el problema de la salud, buscando abolir la intermediación en el sector que ha creado monopolios que absorbe todos los recursos, que se recupere un enfoque público, con el Estado como responsable central, y rescatar la dignidad laboral de los profesionales y servidores. Que se corrijan las deficiencias de la infraestructura hospitalaria y el monopolio del mercado de los medicamentos en manos de multinacionales, y de empresas que manejan la salud con criterio mercantilista. Seguramente, tras esta crisis reforzaremos los sistemas sanitarios y reevaluaremos el papel que desempeñan los expertos, cuya preeminencia es tan notoria estos días.

ECONOMÍA Y PANDEMIA

EL DILEMA ENTRE CUARENTENA Y REACTIVACIÓN

El dilema que enfrentamos como sociedad no es entre economía y pandemia sino entre el sufrimiento humano causado por la COVID-19 y el sufrimiento humano causado por la parálisis de la economía; en sufrimiento por el desempleo, la pobreza, el hambre, por la desnutrición de los niños, por el deterioro psíquico y emocional de las personas y también, por las muertes que causará y está ya causando todo lo anterior. Continuar las medidas de cuarentena terminan siendo ominosas, comunicarles a personas sin hogar, o que medio sobreviven cada día en la economía e informales que sean responsables y se queden en casa, es un agravante. La reactivación de la economía no debe detenerse, debe incluso acelerarse una vez la cuarentena cumpla el objetivo de reducir la tasa de contagios, permita el fortalecimiento del sistema de salud, y educar a la población en las medidas de higiene y protección, para evitar más afectaciones a las empresas y sus trabajadores. El confinamiento absoluto es insostenible. Enfrentamos la combinación de la necesidad impostergable de una reactivación del sistema económico, y por otra, el virus será parte de la vida por al menos un par de años. Luego es necesario aprender a trabajar con él presente. Reanimar la economía será una tarea más difícil que derrotar a la pandemia. Los ciudadanos tienen muy claro que para sobrevivir hay que reinventarse o adaptarse a las nuevas condiciones de la vida en sociedad. La gran preocupación de la gente es cómo salir de esta emergencia con el menor número de lesiones posible, mentales, físicas o económicas. Por lo pronto es necesario mientras no haya vacuna, lograr un sistema convincente para restringir el virus, amplios sistemas de test, hacer seguimiento y ordenar aislamientos a las víctimas encontradas para que los mercados ganen confianza y evitar el colapso financiero.

ESCENARIOS ALTERNATIVOS

Cualquier predicción que se haga en estos momentos tiene un enorme margen de error. Si se logra controlar la pandemia, podríamos recuperar el crecimiento a los niveles anteriores o parecidos. Para ello debe cumplirse que las restricciones de distanciamiento social se levanten o se desarrolle una vacuna o tratamiento. Es posible que lo que marque el ritmo, depende del grado de afectación de la oferta; es decir, la mano de obra, el capital y el crecimiento de la productividad. Si ninguno de ellos cambia, la economía regresará a

su ruta original. Otro escenario más probable para la economía global comprende una caída del PBI del 0.5% al 2,5% en 2020 seguida de un crecimiento del 3% al 6% en 2021, es decir nos recuperamos de la mayor parte del shock pero a una tasa menor. Es posible que recuperemos durante la segunda mitad del año toda la producción que se perdió en la primera. Pero hay muchas actividades, en el sector de los servicios, que no se van a recuperar o al menos fácilmente, como los restaurantes, las vacaciones, los planes de viajes, etc. También suponemos que las respuestas de los gobiernos con políticas fiscales y monetarias muy fuertes tendrán como objetivo ayudar a la recuperación. Pero no hay duda que el segundo trimestre de 2020 va a ser económicamente doloroso, con una caída del 9%; pero no queda claro si se puede recuperar el mismo nivel de producción y crecimiento que se esperaba para este 2020. También ayudan las fuertes medidas de apoyo de los Bancos centrales que están actuando con rapidez para dar liquidez al mercado y grandes paquetes de ayudas en muchos países. Con el aplanamiento de las curvas de contagio y las intervenciones gubernamentales es posible reducir el riesgo de los inversores y la volatilidad. Sin embargo, algunos factores pueden poner en peligro la recuperación económica, como que tras un enorme gasto público, los gobiernos empiecen a aplicar medidas de austeridad antes de tiempo. Pero el mayor riesgo sigue estando en el sector de la salud. Si tenemos un escenario en el que el distanciamiento social se relaja y el número de infecciones empieza a repuntar y vamos hacia atrás y hacia adelante y tenemos una normalización mucho más lenta, eso va a afectar la trayectoria de la recuperación. Si la curva de contagio de la COVID-19 sube y baja y no permite la recuperación final, habría pérdidas en la producción y posibilidad de recesión. Más inquietantemente, es posible que no consigamos una vacuna o tratamiento en el período que abarca este pronóstico, lo que significaría que volver a la normalidad podría ser imposible; es decir, tras una caída, la economía se mantiene a un ritmo mucho menor, sin recuperarse, sería un cambio permanente en el nivel de crecimiento y no una verdadera recesión que implica que se va a volver al nivel que se tenía antes.

CRISIS DE OFERTA Y DEMANDA

Esta crisis macroeconómica no tiene precedentes; a la disminución de la capacidad productiva (choque de oferta), con un desplome de los mercados internacionales, inversión de capital y el declive de la demanda interna o consumo (choque de demanda), se le suman las restricciones al movimiento de personas, que producen a la vez efectos sobre la oferta y la demanda. En esta crisis el problema no se encuentra en los mercados financieros sino en la economía real, compuesta por las empresas, especialmente las pymes y los trabajadores, y no afecta solo a los países de ingresos bajos y medios. Se está produciendo simultáneamente la destrucción de la demanda y la oferta, y las tasas de interés están en mínimos históricos. América Latina es una de las zonas más vulnerables a esta crisis, cuyos niveles de pobreza se encuentran alrededor del 30% y la mayoría de la población está inmersa en el sector informal de la economía sin seguridad social o redes de protección. También son bastante vulnerables los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Las interrupciones directas de la oferta obstaculizan la producción. Este contagio en la cadena de suministro producirá choques de suministro directo entre los países menos afectados por la pandemia, que encontrarán más difícil y más caro adquirir

los materiales industriales necesarios para la fabricación, y los países más afectados, que venderán estos insumos a un precio más caro por la limitación y escasez de unidades. Las exportaciones bilaterales se reducirán drásticamente debido a perturbaciones de la oferta, es decir, cambios en el PIB en el país de origen – el vendedor – y choques de demanda, cambios en el Producto Interno Bruto (PIB) en el país de destino – el comprador –. Sin embargo, existen algunos servicios que podrían beneficiarse de esta crisis, como es el caso de los servicios derivados de las tecnologías de la información y la comunicación, cuya demanda ha aumentado de forma considerable, debido por un lado a la necesidad de las personas de entretenerse, socializar y comunicarse a distancia, y, por otro lado, por el fomento del teletrabajo que permite que los empleados trabajen desde sus casas sin tener que acudir de forma presencial al centro de trabajo. La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que los mercados por sí solos no pueden hacer frente a una crisis mundial como es una pandemia. Las cifras de desempleo son preocupantes. Lo que sigue podría ser peor pues la reapertura de la economía todavía no llega o es muy lenta en sectores que ocupan millones de trabajadores como los servicios, comercio y turismo. Los puestos destruidos son, en su mayoría, los formales; los del comercio, las manufacturas, el turismo, el entretenimiento, etc., y los esfuerzos de los gobiernos por conservar puestos de trabajo y evitar el cierre de empresas no han sido del todo fructíferos. El brutal aumento del desempleo viene explicado por el repentino colapso de esa demanda agregada. Por supuesto que también hay razones de oferta agregada. Los despidos masivos se explican porque se ha paralizado de manera abrupta la demanda de los bienes y servicios finales que las empresas producen. Quizás la contracara de este oscuro panorama sea el hecho de que muchos de los que están temporalmente cesantes, vuelvan a reintegrarse en el corto plazo a sectores de la cadena de producción que surte a la industria. Si bien la crisis del coronavirus no empezó como una crisis financiera, puede llegar a serlo y con una gravedad sistémica. Al menos hasta que la actividad económica reducida no resulte en pérdidas reales de empleos, los balances de los hogares no parecen problemáticos.

CRISIS DE DEUDA

En esta última década la economía mundial ha experimentado una constante acumulación de deuda que tiene un monto del 230% del PIB global. El mundo venía en una fiesta de crédito impulsada por el QE (expansión cuantitativa, medida de liquidez) europeo y americano. Había mucho más dinero que proyectos, entonces empiezan a financiar malos proyectos y sobre todo privados. Esta crisis es mucho mayor que la anterior con casos críticos de las empresas en China, Brasil, Argentina, Reino Unido, Italia, Rusia e India. La búsqueda de rendimientos en un entorno de tasa de interés bajas ha alimentado una ola de préstamos de baja calidad y no solo en obligaciones de deuda garantizadas (CLOs, por su sigla en inglés). No sorprende entonces que la reciente cauda bursátil haya expuesto altos coeficientes de apalancamiento y mayores riesgos de default en momentos en que las CLOs se han expandido rápidamente. Desde 2010 se ha venido construyendo una monumental ola de acumulación de deuda, un derroche sin precedentes en préstamos públicos y especialmente privados que han hecho que la deuda mundial se acumulara a 229 trillones al final del 2018 lo que es dos y media veces el PIB global. La acumulación se

ha dado especialmente en mercados emergentes y economía en desarrollo (EMDE). La ola actual tiene similitud con otros episodios anteriores alimentado por bajas tasas de interés, pero difiere en su tamaño excepcional, velocidad y amplitud, pero también se ha desarrollado un mercado global más resiliente, debido a reformas del sistema financiero post-crisis. La deuda de los EMDE subió del 114% en el 2010 al 170% del PIB en el 2018, ha habido una acumulación de tándem de deuda pública y privada, pero hay que reconocer que también han existido mejoras en las políticas que mitigan los riesgos. En esta acumulación de deuda sobresale el caso de China cuya deuda privada representa las cuatro quintas partes del incremento de la acumulación de deuda privada entre 2010 y 2018, concentrada en pocos sectores, con notoriedad en propiedad raíz, minas y construcción. La deuda también ha subido en países con ingresos bajos a un 67% del PIB, por encima del 48% logrado en el 2010; en 2018 la participación de deuda privada fue mayor en países en desarrollo constituyendo el 73% de la deuda total. Las economías emergentes que han amasado un récord de deuda a PIB del 170%, fuertemente endeudadas estarán en la línea del frente de los stress económicos relacionados con el esparcimiento del virus, particularmente en aquellas con reservas externas en descenso. Adicionalmente los países tienen otras vulnerabilidades tales como crecientes déficits fiscales y de cuenta corriente y un giro hacia una composición de deuda más riesgosa. Este alto endeudamiento tendrá probables default o bajas de calificación especialmente en países dependientes de commodities, lo mismo que entidades altamente apalancadas como los productores de energías fósiles. La pandemia de la COVID-19 dejará una deuda histórica, pues el saldo de los requerimientos financieros del Sector Público (SHRFSP) -la medida más amplia de la deuda- se incrementará en términos reales, es especial si se considera la caída de los ingresos presupuestarios, por la caída de los ingresos tributarios y el efecto de la depreciación de la moneda, así como un mayor costo en las transacciones de la deuda, dicho saldo se elevaría en varios puntos del % del PIB. Esta caída de los ingresos hace que se requiera un financiamiento, lo que se traduce en un déficit primario del PIB. Dicha cantidad sólo cubriría el gasto a programas sociales, salarios de trabajadores públicos, infraestructura y las aportaciones a los estados. El segundo factor que podría aumentar la deuda, pero que podría ayudar a reactivar la económica es un mayor gasto impulsado con medidas contra cíclicas. Si el gasto se incrementa, el déficit presupuestario se aumentaría. Pero implicaría una cantidad de recursos suficientes para reforzar el sistema de salud pública y para poner en marcha la recuperación de la economía. Un efecto indirecto sobre el crecimiento de la deuda será la volatilidad en el tipo de cambio. Esto es una pérdida de valor real en el tipo de cambio respecto al dólar. La depreciación de la moneda incrementa el saldo de la deuda que se encuentra denominada en dólares. Aunque los bancos están mucho más capitalizados que en 2008; los balances corporativos parecen mucho menos saludables, atribuibles en buen aparte a las CLOs, cuya emisión se ha expandido rápidamente en los últimos años. La búsqueda de rendimientos en un entorno de tasas de interés bajas ha alimentado olas de préstamos de baja calidad –y no sólo en CLOs-. No sorprende, entonces, que la reciente caída bursátil haya expuesto altos coeficientes de apalancamiento y mayores riesgos de default.

SALIDA DE CAPITALES

La dispersión de la epidemia y la incertidumbre sobre la posibilidad de que la ciencia encuentre, con el rigor que requiere, fabrique y distribuya equitativamente una vacuna, así como las preguntas sin respuesta sobre las estrategias de reactivación, han causado ya fuertes impactos en inversionistas que tienen el espíritu y la capacidad para impulsar la actividad económica, el empleo y el consumo, que se retroalimentan y son la mejor política social. Una muestra de la gravedad de la situación es que desde inicios de enero el bloque de países emergentes ha acumulado salida de capitales de aproximadamente 85.000 millones de dólares. Estamos frente a una “parada súbita” en los flujos de capitales, que se agravará con el aumento en el costo de endeudamiento de los países. Lo cual se evidencia en una caída en las inversiones extranjeras en títulos (privados y públicos). Esto se da en un contexto donde, por el lado de la deuda doméstica, los mercados de financieros de América Latina en los últimos años se han profundizado financieramente, ampliando su base inversionista a tenedores extranjeros. Por ejemplo, en países como Perú, Colombia y México a fines de 2019 los tenedores no residentes de bonos domésticos promediaban un tercio. Esta parada súbita de los flujos de capitales hacia América Latina aumenta las necesidades de financiamiento por efectos de una depreciación real sustancial. Para la economía promedio de la región, la variación del tipo de cambio real necesaria para equilibrar el déficit externo es superior al 20%. En Centroamérica la pérdida de las remesas impactará significativamente en el PIB en ciertos países como Haití (33%), El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala con 12%. Pero la igualdad de circunstancias está lejos de ser real. Por empezar, la clásica huida a títulos del Tesoro de Estados Unidos en tiempos de estrés global, y el alza del índice de volatilidad, revelan un marcado incremento de la aversión al riesgo entre los inversores. Estos episodios normalmente conviven con diferenciales de riesgo de intereses en marcado aumento y reversiones abruptas de los flujos financieros en tanto el capital sale de los mercados emergentes.

CRISIS DE COMMODITIES

El impacto del coronavirus ha repercutido en sectores desde la energía hasta los metales y los alimentos. A largo plazo, la pandemia podría tener impactos duraderos en la oferta y la demanda de productos básicos, afectando tanto a los exportadores como a los importadores de los mismos. El Banco Mundial advirtió además, que la pandemia podría alterar las cadenas de suministro de alimentos, amenazando potencialmente su disponibilidad. La guerra comercial por petróleo entre Rusia y Emiratos Árabes crea una sobreoferta que sumado a la crisis de demanda hace que el mundo tenga un sobrante de 20 millones de barriles diarios y no hay como almacenar el petróleo que cae en terreno negativo. El crudo en Nueva York cayó por debajo de cero. Los mercados globales de los productos básicos se enfrentan a una interrupción duradera debido al brote de coronavirus, que afectará particularmente al sector energético según el Banco Mundial. Los precios de la energía serán este año 40 % más bajos que en 2019. Tras el colapso del petróleo, se producirá la recuperación más débil de la historia. Incluso cuando haya pasado lo peor de la pandemia, la demanda de petróleo enfrentará cambios estructurales a medida que los mayores controles fronterizos, la interrupción de las cadenas de suministro y el aumento del teletrabajo disminuyan la necesidad de combustibles para el

transporte. El Banco Mundial recortó las proyecciones para los precios promedio del petróleo este año de US\$58 en octubre a US\$35 por barril. El próximo año, el crudo se recuperará a US\$42 por barril, aunque esto también está por debajo de las estimaciones anteriores de US\$59. La crisis está exponiendo la debilidad subyacente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El grupo y sus aliados acordaron recortar la producción para reducir el exceso en el mercado, pero no alcanza la caída sin precedentes de la demanda. Los precios no han hecho más que seguir descendiendo y puede que experimente el mismo destino que otras organizaciones que intentaron restringir el suministro. Sobre los precios de los metales, que también están vinculados con la expansión de la actividad económica mundial, la proyección es que caigan un 13%, con el cobre y el zinc especialmente afectados. La caída en el precio de los commodities que viven los mercados producto de esta pandemia, van a llevar a sus deudores a un estado de "default". Como si la crisis del coronavirus no fuera suficiente, la guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia ya casi ha reducido a la mitad los precios del petróleo, agravando la difícil situación del sector energético. El desplome de los precios del petróleo y las materias primas reduce el valor de muchas exportaciones de mercados emergentes y, por lo tanto, afecta el acceso de esos países a dólares.

MASIVA CANTIDAD DE QUIEBRAS

Un factor importante que incide en las consecuencias económicas que se derivarán de la actual pandemia, es cómo cada sector, cada industria, cada comercio venía manejando sus recursos y cuán organizadas tenían sus finanzas al momento de entrar en cuarentena. Muchas empresas han vivido de lo que la caja diariamente les provee, sin crear ahorros importantes y sin mantener una reserva para las crisis. Ahora bien, para tener con qué producir o prestar el servicio están los préstamos que lo facilitan, pero muchas empresas tienen sus cupos crediticios al tope, ya que las garantías que les pide el sector financiero están comprometidas, así se vuelve más angustioso tener que vender y cobrar para poder seguir operando. Algunos países ya tenían algunos riesgos como la volatilidad de la TRM (tasa de cambio real), la caída de los precios del petróleo, con altos índices de desempleo, mucha informalidad, mucha hambre y desigualdad, en una economía global que solo favorece a los países más ricos, una manipulación de los mercados que no reconoce el valor real de los bienes primarios producidos en los países menos desarrollados, unos mercados financieros diseñados para generar altas rentabilidades con la especulación y las altas tasas de interés que excluye del crédito a los más necesitados. La actual crisis derivada de la pandemia ha llevado a centenares de empresarios a la quiebra, reestructuración o modificación de las condiciones de sus empleados. Desde las grandes empresas hasta las chicas, la crisis acentúa lo frágil de nuestra economía. Los que más sufren con esta coyuntura son los que menos tienen: los desempleados, los marginados y un espectro amplio de trabajadores informales, y de emprendedores que han construido con dificultad pequeñas y medianas empresas. Los bancos en medio de esta encrucijada rebajan los montos de los créditos ya otorgados, o deniegan otros tantos. En un momento en que gran parte de la industria está afectada por las alteraciones de la cadena de suministro, y amplios segmentos del sector de servicios están más o menos paralizados, los defaults corporativos y las quiebras entre

empresas pequeñas y medianas van a dispararse, a pesar del estímulo fiscal y monetario. En los últimos cinco años, los balances de los mercados emergentes (tanto públicos como privados) se han deteriorado, y el crecimiento se ha desacelerado significativamente. En igualdad de circunstancias, el reciente recorte significativo de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y otras medidas en respuesta a la pandemia deberían aliviar las condiciones financieras globales también para los mercados emergentes.

LATINOAMÉRICA

Las políticas de aislamiento y distanciamiento que están salvando vidas también conllevan un costo económico enorme. Una emergencia sanitaria que evoluciona hasta convertirse en una crisis financiera. Los efectos indirectos de la crisis ya se están sintiendo en la región: disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales; caída de los precios de los productos primarios; interrupción de las cadenas globales de valor; menor demanda de servicios al turismo; reducción de las remesas e intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. La pandemia estaría golpeando con especial dureza a Brasil, Ecuador y Perú, pese a que todos los países hayan tomado medidas oportunas, como el confinamiento, para contener la enfermedad. Pero al efecto positivo de dichas medidas le restan factores externos como la caída de la demanda global, precios más bajos del petróleo y los metales, una baja de las remesas y un desplome del turismo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que el valor de las exportaciones de la región en 2020 caerá por lo menos en un 10,7%, debido a la disminución de los precios de los bienes transados y a la contracción en la demanda agregada global. La calificadora Standard and Poor's (S&P) a finales del pasado marzo previó que cada mes de cuarentena en América Latina disminuye el crecimiento del PIB anual entre un 1,5% y un 2%, pero ahora, un mes más tarde, el nivel de contracción se ubica más cerca del 3%, debido a la severidad de la desaceleración del consumo en el gasto discrecional y servicios, así como el freno a las inversiones, y además agrega que el segundo trimestre del corriente año será el peor de la crisis relacionada con el COVID-19 para las economías latinoamericanas, ya que es probable que se mantengan la mayoría de las políticas de distanciamiento social, no sólo en la región, sino también entre sus socios comerciales claves. Las bolsas latinoamericanas también han sido golpeadas por el brote del coronavirus. Índices bursátiles tales como el Ibovespa en Brasil, el Merval en Argentina y el Colcap en Colombia se han visto severamente afectados, con una caída de más del 40% al cierre de la jornada del 18 de marzo de 2020, pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara a la COVID-19 como una pandemia. Asimismo, las principales divisas latinoamericanas han sufrido una marcada depreciación ante el dólar estadounidense entre febrero y marzo de 2020, especialmente el real brasileño y el peso mexicano. Para el 2020, el consenso entre los analistas espera una caída del producto en América Latina y el Caribe entre el -4% y -6%, 5.4% para la Organización de Naciones Unidas (ONU) y 4.6% (sin Venezuela) para el Banco Mundial; lo cual en términos comparativos serían contracciones más profundas que la crisis de la deuda de la década de los ochenta (-2.4%) y la crisis financiera internacional (-2.1%). De materializarse este hecho sería la recesión más fuerte en los últimos 60 años. La pandemia ha generado una

desaceleración de la demanda externa explicada por caída de las exportaciones hacia Estados Unidos, Europa y China. El temor, es que en los meses que vienen, los países de América Latina van a tener empresas que no van a poder cubrir sus gastos, que van a cesar a trabajadores, va a haber familias y empresas que no van a estar pagando sus impuestos, la demanda va a caer, las finanzas públicas van a sufrir, los bancos que hoy son sólidos pueden verse afectados por el menor pago de deuda. Según la Comisión, América Latina y el Caribe (AL y C) enfrentan la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo, ya que sin la COVID-19 en el corriente año la región apenas hubiera crecido un máximo de apenas 1,3% y los últimos cinco años de crecimiento bastante reducido, con buenas excepciones como República Dominicana, Panamá y Colombia. América Latina, no estaba en crisis, pero estaba creciendo más o menos como los países industriales, no más que eso, teniendo menores ingresos que ellos. A esto se suma la inestabilidad social y política que estalló el año pasado en países como Chile, Ecuador y Bolivia. El descontento social por razones muy variadas, muestra una dificultad para una población que de a poco había aspirado a un nivel de vida de clase media, que de a poco se había ilusionado con la convergencia hacia los niveles de vida de Europa del Sur y para la cual, ahora, esas perspectivas son muy remotas. Por eso, es preciso que se reaccione pensando en el futuro pese a la urgencia de la situación. Lo que se haga ahora en la emergencia va a tener también consecuencias a largo plazo.

Por otro lado, China es uno de los principales inversores y compradores de materias primas en América Latina, al igual que ha aumentado sus inversiones en la mayor parte de regiones del mundo. La influencia de China en América Latina ha aumentado por la deserción de varios países que mantenían relaciones con Taiwán, persiguiendo los capitales de la segunda economía mundial y debido al distanciamiento de Estados Unidos con la región. El total de las inversiones de empresas chinas en la región ascendió a 387.000 millones de dólares a finales del año pasado. Los países latinoamericanos aprovechan las oportunidades que brinda la continua actualización del mercado de consumo chino, diversifican sus exportaciones al país asiático y elevan la calidad y los precios de los productos exportados. La creciente cuota de productos de alto valor agregado, como carne congelada, frutas, flores, tabaco y alcohol, contribuye al aumento del valor de las exportaciones de América Latina a China. Por el momento, China es el segundo mayor socio comercial de América Latina. La CEPAL publicó un informe en octubre de 2018 en el que declara que China es el socio comercial más potente de la región latinoamericana y caribeña. China compró más en América Latina de lo que vendió, lo que resultó en un déficit comercial que ha contribuido a la recuperación económica de América Latina a pesar de la actual situación global. El crecimiento del comercio entre China y América Latina se debe a la subida de los precios de las mercancías en el mercado internacional. China ha realizado ajustes proactivos para facilitar el comercio exterior. Por otro lado, la economía de varios países latinoamericanos se estabilizó y se recuperó gradualmente después de los ajustes realizados entre 2015 y 2017. La importación de equipos de producción de estos países aumentó y la demanda de sus consumidores repuntó, lo que estimuló las exportaciones de China a América Latina. Tanto China como América Latina han realizado muchos esfuerzos en los últimos años por optimizar los

productos y aumentar el valor agregado. China está sumando socios activamente en América Latina, mejorando la calidad de sus productos para la exportación, acelerando la construcción de un sistema de logística y distribución e innovando con los canales de comercio electrónico e intenta aumentar la cuota de productos a través de la inversión industrial, la inversión y financiación de infraestructuras, y las fusiones y adquisiciones. Panamá intenta atraer las inversiones y los mercados de volumen intermedio de China, y se ha convertido en un centro logístico para ambas partes y una puerta por la que los productos chinos entran en el mercado latinoamericano. Con el crecimiento económico y la expansión de la clase media china, los productos agrícolas de alto valor agregado serán una posible vía de aumento de las importaciones de China desde América Latina. Con la profundización en las reformas económicas, el ritmo acelerado de la privatización de las infraestructuras y la creciente demanda e inversión en los servicios públicos de alta calidad en América Latina, se necesitarán más equipos mecánicos y eléctricos de alta tecnología, productos electrónicos, así como productos de industrias ligeras de alta calidad en los próximos años. Mientras tanto, desde la perspectiva de la conservación de la energía y la protección del medio ambiente, la demanda de China pasará de las materias primas a los productos minerales y energéticos poco o medianamente procesados, lo que dará mayor impulso a la actualización y mejora del comercio entre los dos bloques. Finalmente, esperar que el mundo se sacuda de la dependencia manufacturera y tecnológica en el corto plazo es poco probable, en especial ante una oferta de productos baratos y abundantes. Finalmente, el crecimiento económico de China fue un motor importante de sus préstamos significativos a más de 100 países en desarrollo de bajos y medianos ingresos en los últimos diez años. La ola de datos económicos débiles provenientes de China para principios de 2020, por ende, aumenta la posibilidad de una reducción sustancial de los préstamos al exterior.

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN ANTE ESTE PANORAMA?

La pandemia global del coronavirus muy probablemente acabará teniendo consecuencias económicas de una intensidad inaudita a corto plazo. Por supuesto, la intensidad con la que el virus afectará a cada país dependerá de muchos factores, como su sistema sanitario, la propia demografía (no es lo mismo una sociedad joven de un país emergente que la de otro con una pirámide poblacional más envejecida), la estructura territorial (países con mucha densidad urbana frente a otros menos urbanizados) o el nivel de desarrollo. Ninguna economía podrá salir indemne de las disrupciones que están experimentando las cadenas globales de suministros, así como de las restricciones a la movilidad internacional de las personas. Además, a todo ello hay que sumar el deterioro del entorno financiero, cuya cara más visible son los descensos históricos que se han producido durante las últimas semanas en todas las bolsas del planeta.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Se podría decir que el mercado puede subir cuando se confirme claramente que hay una vacuna o un tratamiento, que influya en la percepción de los inversores. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la recuperación

será lenta y la crisis tendrá efectos de larga duración que afectarán de manera desproporcionada a las personas más vulnerables. En el mejor de los casos ahora, la caída del PIB mundial lo sitúa en -6%, con una recuperación de hasta el 5,2% en 2021. Pero si vuelve a azotar el coronavirus, la caída será de hasta -7,6% en todo el mundo y la recuperación en 2021 solo llegará a 2,8%, previene. El comercio mundial, que ya venía debilitado por las tensiones comerciales, sobre todo entre Estados Unidos y China, registrará un crecimiento negativo de entre -9,5 y -11,4% este año, en el que también se disparará la tasa de desempleo a 9,2%, que llegará a 10% a nivel global si hay un nuevo confinamiento. Si la pandemia no es controlada, no habrá una recuperación económica robusta. De hecho, el golpe es similar en todo el planeta: la economía de Estados Unidos caerá este año entre 7,3% si no vuelve el virus y hasta -8,5% si hay una recaída, y crecerá a un máximo de 4,1% en 2021. Hasta China entrará en recesión en 2020 (-2,6% si no repunta la crisis y hasta -3,7% si vuelve el virus). Según la OCDE, si el gigante asiático consigue contener la epidemia, el año que viene podría volver a sus tasas de crecimiento habituales, de hasta 6,8%, pero en el peor de los escenarios apenas llegará al 4,5%. En muchas economías avanzadas, se podría perder para finales de 2021 el equivalente de cinco años o más del crecimiento de la renta real per cápita. América Latina y el Caribe se espera que se recupere en 2021 en un crecimiento moderado del 2.6% ó 3.1%. Esto pasaría si somos optimistas pensamos que para entonces la epidemiología va a ser mejor entendida, va a haber más capacidad de pruebas, quizá también una vacuna. Lo más importante es desarrollar una rutina sistemática de pruebas y de seguimiento de contactos; es decir, el virus se contenga en el 2020 y de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y global; y es posible que las economías avanzadas, EE.UU., Europa, China, pueden movilizar los medios financieros y tienen las estructuras institucionales necesarias para rebotar (BBC Mundo). Con economías fuertemente ligadas a socios como China o los países del G7, la capacidad de responder a la crisis de los Estados latinoamericanos dependerá en gran parte de la velocidad a la que se recompongan estas potencias. En este contexto S&P, advierte que habrá una recuperación desigual en los países de la región, según la combinación de políticas más efectivas para contener el brote y robustas respuestas económicas, que ayudarán a reparar más rápido el daño al mercado laboral y a las dinámicas de inversión. El proceso de recuperación se prevé será más lento en México, Brasil y Argentina. Venezuela es el caso más dramático de la región, país donde, según el Programa Mundial de Alimentos, vendrá una gran hambruna. Por otro aspecto, millones de trabajadores ocupados en 2019, la mayoría son informales.

ALIVIO DE LA DEUDA

Blumberg estima que en un escenario optimista el costo de la pandemia es de más de 6 trillones de dólares. Las naciones del mundo desarrollado han respondido a la crisis de la COVID-19 dando apoyo a sus economías y sistemas financieros con medidas inéditas y contundentes, de una escala que hubiera sido inimaginable. Tienen mucho valor las acciones tempranas y coordinadas para limitar el daño a la economía global, mantener el comercio internacional y sostener a los frágiles mercados emergentes. Un colapso económico y financiero generalizado en los mercados emergentes también supone un riesgo para la viabilidad de las cadenas de suministro de las que dependen todos los

países. En vista de su magnitud, la deuda de los mercados emergentes es una amenaza para la estabilidad de un sistema financiero global que ya es dependiente de un fuerte apoyo de los bancos centrales. Y como los mercados emergentes constituyen más de la mitad del PIB global, el riesgo también se extiende al crecimiento global. Así como la Reserva Federal de los Estados Unidos y otros bancos centrales importantes han acrecentado sus balances en formas antes inimaginables, la comunidad internacional debe hacer lo que sea necesario para mantener en funcionamiento el sistema financiero global. Más de 100 países han acudido a Fondo Monetario Internacional (FMI) en búsqueda de asistencia financiera, no obstante, el financiamiento disponible en FMI es insuficiente. Los países con suficiente capacidad de endeudamiento, tales como USA han podido levantar fondos con intereses a tasa ínfimas. No obstante, esos fondos provienen de inversiones de mercados emergentes en busca de seguridad y de inversionistas de USA que buscan liquidar sus posiciones en activos extranjeros, parte del financiamiento con el cual cuenta USA como otras economías avanzadas, proviene de economías emergentes que tiene necesidades financieras de mucho más apremio. Imponer austeridad a gran escala a países en desarrollo que ya están en dificultades sería una tragedia. Es necesario que una institución multilateral como el Banco Mundial establezca un mecanismo o una línea de crédito para cada país que solicite una suspensión temporal de los pagos de servicios de su deuda, permitiendo que deposite en esa línea de crédito los intereses suspendidos como fondo de emergencia para la lucha contra la pandemia. Las amortizaciones del capital programadas durante ese mismo periodo también serían diferidas de forma tal que todos los pagos relacionados con la deuda serían post puestos. El FMI, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo deben ampliar el otorgamiento de crédito en forma tan contundente como los bancos centrales. Esto implica reconocer que el actual entorno de tasas cercanas a cero permite usar más apalancamiento que antes y que de poco sirve tener reservas si no se las puede utilizar ahora. Además del alivio del pago de intereses de deudas, el FMI (que tiene reservas por 150 000 millones de dólares en oro y una red de líneas de crédito con los bancos centrales) debe mostrarse dispuesto a prestar hasta un billón de dólares. Es el momento para ampliar el uso de la divisa internacional llamada «derechos especiales de giro» (DEG), el activo global de reserva del FMI. Para mantener el equilibrio entre la moneda global y la expansión monetaria local en los países ricos, se necesita con urgencia un incremento de los DEG muy superior al billón de dólares. Por otro lado, sería una tragedia y una farsa que el aumento del apoyo financiero global a los países en desarrollo terminara ayudando a sus acreedores en vez de a sus ciudadanos. Las deudas nacionales contraídas antes de la crisis deben ser un tema prioritario de la agenda financiera internacional. La forma más inmediata e importante de dar apoyo en el corto plazo puede ser suspender los próximos pagos de deuda de los 76 países de ingresos bajos y medios inferiores que reciben apoyo de la Asociación Internacional de Fomento. La propuesta actual es que los países acreedores ofrezcan una pausa de seis o nueve meses en los pagos de deudas bilaterales, a un costo de entre 9000 y 13 000 millones de dólares. Pero esta propuesta es limitada en cuanto a su horizonte temporal y en cuanto a la nómina de acreedores. Una propuesta alternativa es aliviar más de 35 000 millones de dólares de vencimientos de este año y el siguiente correspondientes a préstamos bilaterales oficiales, porque la crisis no se resolverá en seis meses y los gobiernos

necesitan algún grado de certeza para la planificación de sus gastos. En esto será crucial la actuación de China, que posee más de la cuarta parte de esas deudas bilaterales. La decisión de China de proveer fondos para la inversión a largo plazo en economías en desarrollo ha sido bienvenida, y aceleró la construcción de importantes infraestructuras. Ahora es el momento para que China asuma un papel de liderazgo junto con otros acreedores, renunciando a los pagos de deuda que le corresponden este año y el siguiente. De aquí a fines de 2021 hay vencimientos por 20 000 millones de dólares correspondientes a préstamos del sector privado, que a menudo se otorgaron a tasas elevadas. Como reconoce el Institute for International Finance (que representa a acreedores privados de los mercados emergentes), el sector privado tiene que asumir una parte de la carga. Sería inaceptable que todo el dinero que fluye de los organismos multilaterales para ayudar a los países más pobres no se use para implementar medidas sanitarias o de reducción de la pobreza, sino para pagar a acreedores privados, especialmente acreedores como los grandes bancos estadounidenses que siguen pagando dividendos en un tiempo de crisis. Los países del G20 acordaron suspender hasta finales del año 2020 los pagos por concepto de deuda oficial bilateral de 76 países clasificados como países más pobres. Sin embargo, el acuerdo de los países del G20 no incluyó a los acreedores privados que constituyen una parte importante de esta deuda. Los acreedores privados para países de ingresos medios como México representan una parte mayor de las acreencias. Sin la participación de sector privado, cualquier medida de alivio oficial para los países de ingresos medios se usaría únicamente para pagar el servicio de deuda con el sector privado. Carecería de sentido que el sector oficial otorgara un alivio en la carga de la deuda de los países pobres si este alivio va a resultar en una transferencia de fondos para los acreedores comerciales. La enseñanza del pasado es que el mejor modo de afrontar las recesiones internacionales y sus consiguientes costos humanos es hacerlo lo antes posible, en forma decidida y juntos.

GASTO FISCAL

Ahora, las necesidades financieras de nuestros países son básicamente para atender la emergencia médica y para ayudar a la gente que no puede trabajar, que es informal y que vive el día a día, lo cual puede ser manejable, pero con el poco espacio fiscal que tenemos en América Latina, si se necesitan medidas más extraordinarias para apoyar la actividad económica o para impedir una crisis financiera, es ahí que viene el gran riesgo. Enormes paquetes fiscales de emergencia están inyectando dinero a la economía, un nivel de gasto extraordinario, para mitigar los efectos de la crisis económica global. Hasta ahora, el monto total del gasto fiscal a nivel global se acerca a los US\$7,2 billones, equivalente a unos US\$1.152 per cápita. El gasto fiscal frente a la pandemia en relación al PIB es de 3.67 a nivel global, 2.4 % en América Latina y 6,7 % en los países ricos. Los países con menos camas de hospital han tenido que desembolsar más recursos, algo que está directamente relacionado con la calidad y la cobertura del sistema de salud de cada país. El nivel de exposición a la pandemia también juega un rol clave, en la medida que los países con un mayor número de contagios, tienen mayor presión para inyectar más recursos. Otro elemento relevante es el acceso al crédito o la ayuda internacional, dado que, si un país tiene bloqueadas las vías de oxígeno financiero, no tendrá muchas opciones de aumentar

su gasto. En América Latina el sector informal es muy grande. Eso hace que la recaudación de impuestos sea baja y por lo tanto, el tamaño de los paquetes más reducido. No hay que confundir el tamaño del paquete con la efectividad, lo más importante es cómo se gasta el dinero (en darle crédito a las empresas pequeñas, en rescatar a empresas grandes, en los desempleados, en los informales, o en los bancos), según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), centrado en los recursos totales anunciados por los gobiernos (incluyendo gasto directo, reasignaciones, préstamos a los bancos y otros factores) arroja que el costo de estos paquetes llega al 4.1% del PIB en Latinoamérica. Con estos parámetros, Chile ocupa el primer lugar de la lista con un 15.1% del PIB, seguido por Perú (11.1%), y el El Salvador y Colombia con cerca de 8%. La región en la última década se ha caracterizado por el bajo desempeño del crecimiento económico y la persistencia en el déficit fiscal. Así, al cierre de 2019, el 60% de los países de la región mostraban niveles de endeudamiento mayores del 40% del PIB y ajustes fiscales que oscilaban entre 2% y 7% del PIB. Los gobiernos actuales han respondido incrementando su presupuesto para atender la crisis, en promedio el incremento presupuestal en la región es equivalente entre 2.4%-3.3% del PIB. Si algo ha quedado claro en lo que llevamos de crisis es que el argumento de que un país no se puede permitir un programa económico ampliamente social ha demostrado ser falso. En el largo plazo, determinados componentes de la demanda agregada (entre los que se incluye el gasto público) evolucionan de forma autónoma con respecto a la dinámica de la producción agregada. Esto implica, que el gasto público no está vinculado de manera mecánica a la dinámica económica, sino que es independiente de ésta. El gasto público depende sobre todo de cuestiones políticas, institucionales e históricas. Los argumentos a favor de reducir gastos en sanidad, educación, inclusión, vivienda social, reducción de la desigualdad, etc. están y han estado sólo basados en ideología y no en un riguroso análisis científico de cómo funciona la economía. En las circunstancias actuales se hace necesario un estímulo fiscal, pero al mismo tiempo las condiciones de financiamiento se deterioran. Las primas de riesgo se han incrementado de manera sustancial, en más de 600 puntos básicos (pbs) en promedio en lo corrido del año. Las economías han tenido fuertes depreciaciones que incrementan el valor de la deuda en moneda extranjera y han visto disminuido de forma sustancial su acceso a los mercados de deuda. Ajustes de mediano plazo se hacen necesarios para recobrar la senda de sostenibilidad fiscal y esto puede ser un reto particularmente mayor, para los países con menor espacio fiscal, los cuales enfrentan la disyuntiva entre el costo del ajuste fiscal futuro contra el costo económico de la posibilidad de eventos de impago de la deuda y/o crisis financieras. Para lograr una estabilización de la deuda y mejorar la posición fiscal de la región será necesario, en un contexto post-pandemia, que la actividad económica y los ingresos fiscales crezcan más rápido que la acumulación de déficit pasados. De esta manera, para retornar hacia la senda de sostenibilidad fiscal es necesario establecer mecanismos para que los incrementos en el gasto sean transitorios y no se conviertan en rigideces presupuestarias más adelante. Esto incluye las múltiples exenciones en materia tributaria, gastos y pasivos contingente que puedan aparecer en respuesta a la crisis. Todas estas medidas permitirían que ante los incrementos en la deuda y el déficit se puedan establecer mecanismos de corrección hacia una senda de consolidación fiscal. Las entidades del gobierno tienen la doble responsabilidad de ayudar

a resolver la crisis en el corto plazo; y en el mediano y largo plazo la de impulsar la reactivación económica. Que requiere muchos recursos con la dificultad, que la misma crisis golpea las finanzas del estado, por la disminución en los diferentes tributos y en general de los ingresos; como mínimo van a tener una disminución de ingresos por disminución del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio. Esta disminución en los ingresos y la necesidad de cubrir gastos que antes no estaban presupuestados, va a modificar los planes de desarrollo y los programas de Gobierno con una muy baja capacidad de endeudamiento por el aumento de la deuda pública interna y externa en niveles aun no cuantificables. En general se debe atender la crisis con los recursos del fisco del gobierno, la solidaridad de la empresa privada, y algunos ciudadanos que contribuyan de manera generosa y solidaria para remediar el problema de hambre. El Gobierno en parte para financiar estas obligaciones, puede colocar subastas de títulos de deuda pública, de tal manera que haya tranquilidad en esos mercados, y les permita ofrecer estos apoyos para tratamiento del deterioro económico del país. El Banco Central puede realizar una emisión monetaria que es una posibilidad real, siempre que ésta sea respaldada por operaciones de deuda interna, para suministrarle más recursos a la economía. Esto permite el financiamiento del estado sin mediar compra de deuda en casos cuando es urgente reactivar la demanda agregada, estimular el nivel de empleo y recuperar la tasa de crecimiento de la producción. Sin embargo, existe un riesgo asociado a la expansión de la demanda agregada, como una mayor inflación, la fuga de capitales, las altas tasas de interés y el mayor déficit fiscal y puede asumirse en países con mayor reputación en los mercados internacionales por parte de las calificadoras de riesgo debido a la inestabilidad macroeconómica. Históricamente se ha visto como solución intermedia que muchas veces acrecienta las dificultades de las economías y profundiza los desequilibrios económicos, especialmente, por la pérdida de confianza en la moneda local y el deterioro en las funciones básicas del dinero nacional. Es importante que los Gobiernos financien gran parte de los requerimientos para superar la crisis, incluyendo la búsqueda de préstamos internacionales; que incremente el déficit fiscal, sin descuidar la intención de algunos para aprovechar la crisis e imponer cambios en favor de una mayor acumulación en manos de una minoría. Las organizaciones con ganancias obtenidas en periodos anteriores deben aportar decididamente en la mitigación de esta catástrofe, a sabiendas de la contribución de la clase media al robustecimiento del capital. Pero debe incluirse un subsidio a los informales, con el concurso de los trabajadores oficiales que deberían renunciar también a un % de sus ingresos, en especial, los altos salarios del Estado para subsidiar salarios de miles. En cuanto a la política económica, reactivar la producción no es suficiente en ausencia de demanda para ella, es necesario revertir la interacción en espiral descendente e iniciar un círculo virtuoso de espiral ascendente apoyando también a la demanda. Para sostener la oferta es necesario ampliar el impulso de ésta con subsidios de transferencias directos al consumidor y no a través de los bancos que continuarán asignando los recursos de acuerdo a sus consideraciones de rentabilidad y riesgo tradicionales. La amenaza de un derrumbe generalizado de la economía requiere de programas de estímulo en todos los gobiernos, desarrollados o emergentes; es decir, primero deuda y después soluciones.

LOS IMPUESTOS Y LA SOLIDARIDAD

La crisis económica provocada por la pandemia ha agudizado al debate sobre cómo asumir el gigantesco costo fiscal de las medidas de emergencia tomadas por los gobiernos. Han surgido propuestas para recaudar fondos adicionales para mitigar las profundas huellas económicas que dejará la crisis global. En respuesta a la emergencia económica se han promovido tres propuestas por economistas independientes, partidos políticos, centros de estudios u organismos internacionales: -Subir el impuesto a las grandes fortunas (patrimonio), planteado como un impuesto "por única vez"; -Subir el impuesto a la propiedad de las personas, un impuesto extraordinario a la propiedad -por una sola vez-. -Subir el impuesto a la renta personal que grava los ingresos de las personas, es decir, las utilidades generadas por su capital (habitualmente invertido en acciones), y otros ingresos que pueden provenir, por ejemplo, de salarios, con la creación de un impuesto excepcional o "Tasa COVID" de carácter progresivo durante 2020 y 2021, para aumentar el gravamen sobre los réditos o ganancias anuales de las personas. La recaudación fiscal por el pago de impuestos sigue siendo muy baja en Latinoamérica y reduce poco las desigualdades, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esa recaudación solo llega al 23.1% del PIB en la región, mientras que en los países de la OCDE el promedio sube a 34.4%. Algunos países como Guatemala, Paraguay y República Dominicana, recaudan menos del 14%. La recaudación del impuesto a la renta de los individuos es mucho más baja: 2.2% del PIB en América Latina y 8.3% en la OCDE. De igual manera, el BID, dice que hay un enorme espacio para mejorar el impuesto a la propiedad en Latinoamérica. La región recauda cerca de medio punto del PIB en impuesto a la propiedad, mientras que los países de la OCDE recaudan por encima del 1.5%. Hay espacio para triplicar el impuesto a la propiedad, es mejor concentrarse en este tipo de instrumentos, antes que gravar las fortunas en general. La experiencia internacional, ha mostrado que el impuesto a la fortuna, recauda mucho menos de lo que se esperaba porque es muy difícil de cobrar y los resultados han sido heterogéneos. Al subir el impuesto a la renta de las personas, al mismo tiempo, hay que aumentar la eficiencia del gasto público porque se desperdicia mucho dinero en la región. Los países de la región no están explotando de manera efectiva el impuesto a la renta de las personas. Y su baja recaudación, se explica, porque solo lo paga cerca del 10% de la población, tiene exenciones muy generosas que benefician a los segmentos de ingresos más altos y en muchos lugares los ingresos de capital no pagan impuestos; es decir, sobre las ganancias que generan las acciones. Los detractores de este tipo de medidas, argumentan que un alza tributaria daña la inversión y la creación de empleos, haciendo más difícil la recuperación económica o la posibilidad de una fuga de capitales hacia países con menos impuestos. Otro de los argumentos es que las propuestas para subir impuestos a los más ricos tienen un fundamento ideológico –en el antagonismo de la lucha de clases-, en vez de un fundamento técnico. Y a eso se suma la desconfianza que existe en los sectores empresariales respecto a la transparencia y eficacia con que el Estado administra los recursos públicos. A futuro viene el desafío de generar más ingresos fiscales, no solo para pagar la factura que dejará la pandemia, sino también para enfrentar la caída en el precio de las materias primas y otros efectos de la recesión global. Por eso los expertos dicen que

será necesario crear un nuevo pacto fiscal. El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), dice que lo más probable es que los países modifiquen varios tributos para asegurar la sostenibilidad. Qué tipo de combinación de impuestos y cómo hacer un reparto solidario del coste de la crisis, tendrá que interpretarlo cada país, porque además hay que preservar la recuperación. La pandemia generada por el COVID-19 ha demostrado la importancia que tiene el principio de solidaridad en el ecosistema económico. Es importante que se cree un régimen de estímulos fiscales que les permita a las empresas desarrollar su actividad filantrópica y que estimule la creación de sociedades de “beneficio e interés colectivo” (BIC). Cualquier sociedad comercial puede adoptar la condición de BIC en las cuales además del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del interés de la colectividad y del medio ambiente. La adopción de esta condición de BIC implica ciertas obligaciones para el empresario, tales como lo son adoptar la correspondiente reforma estatutaria, presentar ante el órgano máximo social el reporte del impacto de la gestión de la respectiva sociedad y adaptar las políticas empresariales a los intereses colectivos. Esto bien puede traer algunos incentivos para las BIC, como portafolio preferencial en materia de propiedad industrial, acceso preferencial a líneas de crédito y tratamiento tributario de las utilidades repartidas en acciones a los trabajadores y debe tener unos beneficios fiscales mayores a los hoy existentes para las compañías que adopten la condición de BIC. Aquellas empresas que entiendan este nuevo capitalismo social y sean conscientes de que maximizar el beneficio no puede ser el único objetivo. Valores como la integridad, la transparencia o el compromiso social han llegado para quedarse, y aquellos que no estén alineados con ello perderán su reputación y estarán rezagados en el mercado.

SOCIEDAD

EL MODO DE VIVIR Y LA MORAL

La experiencia es una verdadera fuente de aprendizaje de la vida para encarar, lo que tantas veces hemos dejado de lado; sin embargo, tenemos un peligro latente como sociedad en este momento histórico: no aprender nada de lo que estamos viviendo. Todo parece indicar que nos abocamos a lo mismo de siempre; hay una realidad demasiado peligrosa para nuestra sociedad, la impaciencia por poder salir a comprar, poder hartarse, poder gastar, poder satisfacer irracionalmente sus deseos compulsivos; es decir, ceder todo al poder de la necesidad; queremos seguir siendo los mismos, cuando la historia nos está dando la oportunidad de ser radicalmente otros. Esta experiencia solo será un espacio para olvidar y seguiremos el juego de intereses de muchas estructuras como la religión, política, economía y la academia, opuestas a la realidad dinámica de la evolución humana; a su conveniencia todo debe volver a la normalidad, es decir, mantener su miope misión. Es posible que los dueños del poder y en buena parte responsables de todas las penurias se las ingenien para persuadir a la gente de que están haciendo esfuerzos por “arreglarlo” todo. Y lucharán para defender lo que consideran debe seguir siendo la forma de promover crecimiento económico, producir riqueza y transformación social a partir de la redistribución de los excedentes que genera el mercado. El riesgo puede ser que, con la pretensión de mantener el modelo de mercado dominado por la oferta y demanda sin

control, se termine por sacrificar la democracia y el estado social de derecho. Es posible que tardemos en reaccionar y regresemos a protagonizar una idea equívoca de resignación. Por otro lado, la moral es como la cultura y la forma de comportarse regularmente, cotidianamente, eso no necesariamente mejora con los sucesos catastróficos. No sabemos todavía qué podrá ocurrir. La cultura del consumo, es una cultura popular y eso no se cambia de la noche a la mañana. En la cultura económica hay una forma de obrar, de pensar, de medir, de considerar lo exitoso, lo fracasado, lo útil, lo inútil y eso es muy difícil de que cambie, inclusive en circunstancias tan graves con esta. Es posible que haya un reacomodamiento exigente y muy difícil, pero lo más probable es que volvamos al modo de como veníamos comportándonos. A no ser que esto llegue a un colapso. En este tipo de situaciones o somos solidarios o somos egoístas. En esta crisis debemos reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante para alcanzar la igualdad y el bienestar social. Hoy hay una gran solidaridad aparente en la comunidad científica internacional buscando la posibilidad de encontrar una cura o una vacuna; hay solidaridad cuando la gente sale a ayudar a los más necesitados a socorrer a personas en condiciones muy precarias; eso es lo que uno quisiera que primara. No creo sinceramente que de esto salga una sociedad mucho más igualitaria. Si queremos subsistir, debemos ser solidarios. Es nuestro único destino, debe ser nuestra única identidad. La humanidad debe reinventarse, la sociedad debe reinventarse. No puede haber cambio en abstracto o en general si antes no cambia cada uno. La solidaridad es la inteligencia que nos impedirá desaparecer. Es lo único que puede salvarnos, no solo de esta sino de las que vendrán, no solo de pandemias sino de decenas de catástrofes que son causadas o no evitadas por nosotros mismos. La solidaridad que nos salvará es la adhesión a una sola causa: a la causa de la vida. Es entender la unidad que somos todos con todos y con todo. Debemos tomar conciencia de saber que necesitamos del otro, en la alteridad nos encontramos auténticamente, que no debemos apostar la vida entera, vendidos al espejismo de una vida monetaria. Si salimos de esta encrucijada sin habernos cuestionado el papel que cada uno desempeña en su ámbito familiar, social y laboral, entonces se perdió un tiempo precioso. Es probable que hayan muchos movimientos sociales buscando reivindicaciones, porque en estas situaciones se manifiesta de manera más patética la desigualdad, la pobreza. Puede haber reivindicaciones que se manifiesten en la legislación, pero no en la realidad. Paradójicamente ha sido muy malo el comportamiento de algunos grupos sociales que no han atendido las medidas impuestas para atender la pandemia. A estos grupos hay que agregar el de los especuladores y acaparadores que buscan aprovecharse abusando de la situación. Mala también ha sido la acción de algunos que han dado la sensación de que están en campaña para las próximas elecciones o de algunos dirigentes políticos que buscan un desmesurado protagonismo entorpeciendo las actuaciones del gobierno. Los actores sociales tenemos objetivos comunes y uno de ellos es la continuidad de la sostenibilidad de la comunidad, es por esto que existe una corresponsabilidad y un compromiso sobre cómo proteger la vida y generar bienestar para los seres humanos. Millones de personas en el mundo construyen espacios de cooperación, y desarrollan propuestas redistributivas. El sentido debe ser poner en el centro la necesidad de hacer todo lo posible para preservar la vida humana de manera digna, y ante esto, los Estados deben ponerse de manera integral al servicio de

concretarlos. Dada la convergencia de diversas culturas, tradiciones e ideologías, tiene que ser posible encontrarnos alrededor de propósitos comunes que permitan superar la indiferencia y la exclusión social y seamos instrumentos de paz y solidaridad. Es una oportunidad para incitar una discusión global que permita establecer medidas para resolver desafíos inmediatos como la crisis financiera o de los sistemas de salud, pero al mismo tiempo generar la capacidad para solucionar las situaciones de largo plazo, en particular el cambio climático o la enorme inequidad económica; para lo cual se requiere una nueva sociedad. La equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. El problema no es si alguien gana más o es más rico que otro, sino si la riqueza que genera ayuda a mejorar las condiciones de vida de cada uno. En muchos países se ha progresado económica y socialmente, la calidad de vida de las personas se ha elevado (en ingresos, expectativa de vida, acceso a la educación y a la salud, por ejemplo), hay una opinión pública que funciona y existe la división de poderes y en caso de no existir se puede mejorar o se pueden crear los mecanismos para hacerlo. Es necesario revisar los planes de desarrollo para tener en cuenta las muchas limitaciones adicionales que vendrán por efectos de la pandemia. También habrá que revisar drásticamente la forma como está viviendo gran parte de la población gracias a un urbanismo descontrolado y ambicioso con que se desarrollaron muchos asentamientos urbanos están hacinados y sin vías de acceso lo que entre otras cosas dificulta la entrega de auxilios. Debemos prepararnos a emprender un proceso de resocialización lento, que implicará paciencia, restricciones en las expresiones de afecto, filas, turnos, citas, cambios de rutinas, espacios, entre otras tantas cosas de nuestra cotidianidad. Hay que potencializar nuestra capacidad de adaptación para entender, enfrentar y finalmente controlar las nuevas circunstancias que se nos presentan. Hay que reinventar el sistema educativo, el sistema económico, las empresas, las formas de trabajar, la manera de relacionarnos, de alimentarnos, de vestirnos, nos tenemos que reinventar a nosotros mismos.

CRISIS SOCIAL

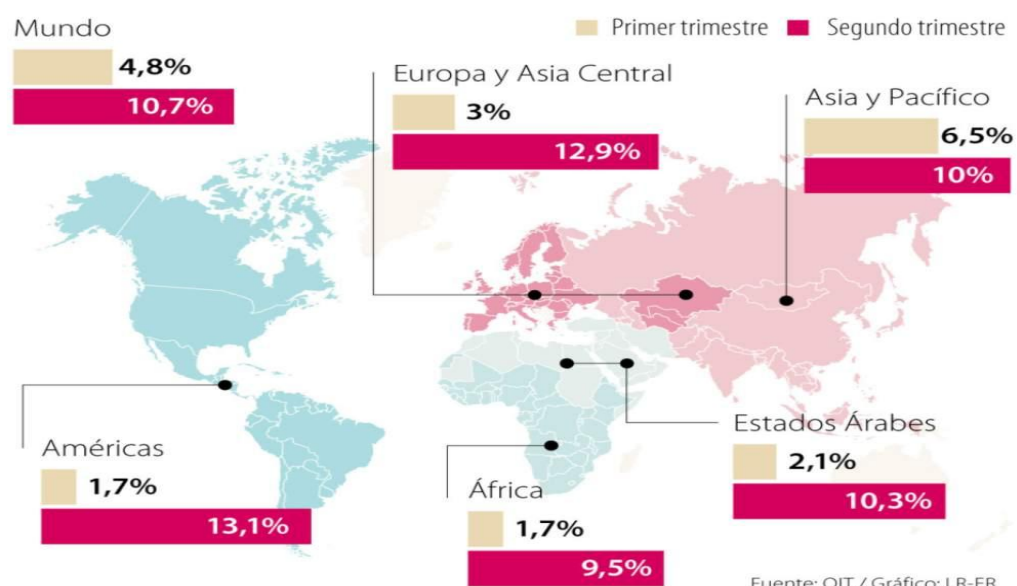
Para mitigar el impacto de la crisis resultada del coronavirus hace falta reforzar la protección social. La única manera de lograr una recuperación que se sostenga y de prevenir futuras crisis en los países en desarrollo será subsanar el déficit de protección social que ha quedado en evidencia con la crisis generada por la pandemia de COVID-19. La respuesta a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus requiere la implementación de sistemas de protección social reforzados e integrales. De no ponerse en marcha planes de respuesta que incluyan ese tipo de protección, la recuperación no será sostenible y se expondrá a la pobreza a millones de personas, además de que afectará la capacidad de reacción mundial cuando se presenten otras emergencias. La crisis humanitaria se refleja en una amplia variedad de situaciones que afectan en mayor o menor medida a la mayor parte de la población mundial, entre las cuales se pueden mencionar la precariedad laboral que impide que los trabajadores formales e informales tengan los ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas; todo un sector laboral se vio sin ingresos de la noche a la mañana: camareros, personal de aseo en hogares y empresas, empleados del pequeño comercio o trabajadores independientes de la clase

baja y media-baja que vivían de mes en mes y en dos meses se quedaron sin ahorros, y que por su anterior situación laboral, quedaron fuera de subsidios públicos o solo tienen derecho a una parte. En América Latina la mayoría de los trabajadores son informales, no tienen un contrato, viven de lo que puedan conseguir en la calle. Con virus o sin virus, tienen que salir cada día a ganarse el pan para sus hijos. Es la cruda realidad que nos espera; si antes de la crisis de salud esas personas no tenían empleo, que nos espera después. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) el 55% de la población mundial, o 4000 millones de personas, carece de seguro y de asistencia social y solo el 20% de las personas desempleadas tiene derecho a una prestación de desempleo, aunque en algunos lugares la cobertura es incluso inferior. La carencia de protección social ha obligado a ir a trabajar a personas que están enfermas o que deberían autoconfinarse, aumentando así el riesgo de infectar a terceros. Además, la pérdida de ingresos aumenta el riesgo de pobreza de los trabajadores y sus familias y esto podría tener un efecto duradero. La OIT insta a adoptar medidas urgentes y a corto plazo para resolver los déficits de cobertura y adecuación de la atención de la enfermedad, mediante el apoyo a la salud pública, prevención de la pobreza y promoción de los derechos humanos a la salud y la seguridad social. Entre las medidas propuestas se incluyen la ampliación de la cobertura de la prestación de enfermedad a toda la población, asegurándose de llegar a las mujeres y los hombres con una relación de trabajo atípica o informal, a los trabajadores por cuenta propia, a los migrantes y grupos vulnerables. También recomienda aumentar las prestaciones para que proporcionen seguridad del ingreso, acelerar la concesión de subsidios y ampliar el alcance de las prestaciones en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como el tiempo pasado en cuarentena o cuidando de personas enfermas a cargo. La crisis de la COVID-19 es un llamado de atención. Ha demostrado que la falta de protección social no solo afecta a los pobres; también pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes tenían una situación relativamente buena, pues el costo de la atención médica y la pérdida de ingresos puede destruir fácilmente el fruto de decenios de trabajo y los ahorros de una familia. Los países con un sistema de protección social sólido e integral están en una posición mucho más fuerte para intervenir ante una crisis y recuperarse de ella. Los encargados de formular políticas tienen que aprovechar el impulso generado por la creciente conciencia del público sobre la importancia de la protección social y la urgencia de invertir en ella como sociedad, para asegurar la capacidad de respuesta en crisis futuras. La protección social debe considerarse una inversión, no un costo adicional. Desempeña un papel primordial para mitigar los efectos de las crisis en el plano social y constituye un elemento estabilizador en el plano económico. Además de la trágica pérdida de vidas humanas, es probable que la pandemia aumente la pobreza y la desigualdad, y que repercuta adversamente, en particular, en las personas de más edad, las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, los trabajadores migrantes y las personas desplazadas por la fuerza. Las medidas políticas que han adoptado muchos países a escala nacional en materia de protección social para hacer frente a la crisis son de índole muy diversa, han sido destinadas a mitigar los efectos devastadores de la pérdida de empleos y medios de subsistencia y consisten en subsidios o ayudas sociales especiales, protección contra el desempleo, prestación de servicios sanitarios y asignación de alimentos.

DESEMPLEO EN AMÉRICA LATINA

El impacto negativo que ha tenido la pandemia del COVID-19 en los países de la región ha llevado a que el desempleo alcance niveles nunca antes vistos. Solo en Brasil, la cifra de desempleo llegó a 12.6% entre febrero y abril, lo que ha significado una pérdida de al menos 4,9 millones de puestos. Al no ser tan estrictas las medidas de confinamiento, se tradujo en un aumento de la propagación del virus y cayeron las remesas por turismo en más de 35%. En Chile, la tasa de desempleo en su capital, Santiago, alcanzó 15.6% entre abril y parte de mayo. Por su parte, México registró una pérdida de 707.055 empleos entre el 18 de marzo y el 28 de abril. Mientras que la capital de Perú, Lima, reportó una reducción de más de 1,2 millones de personas que se quedaron sin su oficio entre febrero y abril. La OCDE pronostica que Colombia tendrá una tasa de desempleo del 21.1%, superior en 12.7% al promedio que se estima para los 37 países que la conforman que sería del 8.4%. Estos datos van en línea con las proyecciones de la CEPAL y la OIT que indicaron en un recientemente informe, que la actual crisis generaría por lo menos, 11,5 millones de nuevos desempleados en la región para el cierre de fin de año y la pérdida de empleos de cerca de 200 millones en el mundo. Hay que tener presente que estas proyecciones han tenido en cuenta el impacto que ha sufrido el mercado laboral, pues el año pasado la contribución del aumento del empleo registrado en la región, se dio primordialmente en sectores como comercio, restaurantes y hoteles (39.5%) y servicios comunales, sociales y personales (30.40%), segmentos que hoy por hoy están afectados. La OIT señaló que la disminución de horas laborales se ubicará en 10.7% al cierre del segundo trimestre del año, siendo las Américas (13.1%) Europa y Asia Central (12.9%) las zonas con mayores caídas.

PÉRDIDAS DE EMPLEOS 2020



LA MIGRACIÓN

Los migrantes se han convertido en los apesados de esta época. Ningún país los quiere, sufren constante rechazo y por fuerza de las circunstancias, se han convertido en amenaza sanitaria a raíz de la pandemia. Si son acogidos, lo es con una frágil mezcla de conmiseración, solidaridad y corrección política. Los estados no les dan la bienvenida y entre las poblaciones de los países receptores, crece la xenofobia. Así como desesperados árabes y africanos encuentran muros infranqueables en las fronteras europeas, a los centroamericanos, se les han cerrado las puertas de Estados Unidos con el agravante de que cruzar el largo territorio mexicano es una aventura con mínimas posibilidades de final feliz. De este lado del continente, la huida de Venezuela fue un salto al vacío. No encajan donde están, menos en su propio país, aunque, al final de cuentas, pareciera su único reducto posible. Si desde el inicio las oleadas de migrantes venezolanos eran percibidas como amenaza a la estabilidad regional, la llegada del coronavirus agravó considerablemente su situación. Al riesgo de enfermar se agregó el peligro de multiplicar la enfermedad en territorio ajeno. Es una población sin seguridad social ni protección médica. Llegaron pensando que de este lado habría futuro y está presa de la peor combinación posible: pandemia más crisis económica sin precedentes. No tiene cómo acatar el confinamiento decretado por los gobiernos porque habita espacios reducidos; menos, mantener sana distancia o practicar hábitos de higiene saludable. Carece de empleo, ya difícil para los nacionales, engrosa las filas de la abultada informalidad, vive al día, sin siquiera la garantía de alimentarse. Por falta de documentos no pueden inscribirse en los programas de ayuda organizados por los gobiernos. Para ellos, la situación sólo tiende a agravarse por el crecimiento del desempleo en los países donde pudieron llegar. Mientras los adultos desesperan por su situación laboral, la gran mayoría de la niñez padece de falta de colegio y desprotección. Los venezolanos fuera de su país suman cerca de 5 millones; 2 millones menores de edad. Jamás pensaron en vivir su crisis dentro de una crisis mayor y de proporciones globales. Son familias que huyen y no sólo individuos que escapan. Salieron confiando que tendrían para vivir y enviar dinero a quienes quedaban atrás. Esas dos posibilidades se han cerrado, motivo adicional para el ahondamiento de la crisis en su país. Interminable lista de necesidades de la población venezolana dentro y fuera del país: repatriación, crisis sanitaria, alimentación, medios de vida, alojamiento, escuela, protección y mucho más. La COVID-19 modificó el rostro de la migración: la opción del éxodo ha decaído considerablemente por la crisis generalizada y el temor al virus. Quienes se fueron, prefieren volver a su tierra pese a la incertidumbre que los espera.

POBREZA Y CRISIS ALIMENTARIA

El coronavirus implicará una reducción de 3.2 % del PIB mundial para este año según el informe de las Naciones Unidas. Es probable que las proyecciones económicas se rebajen aún más el próximo mes sobre la base de nuevos datos. Se proyecta que la pandemia de la COVID-19 eliminará cuatro años de crecimiento de la economía global, o casi US\$8,5 billones en producción total, según un nuevo estudio de las Naciones Unidas. Según la ONU, la pandemia hará que cerca de 34,3 millones de personas caigan por debajo de la línea de extrema pobreza. Además, señaló que, para 2030, 130 millones de personas más podrían unirse al grupo de personas que viven en la extrema pobreza, lo que sería un gran

golpe para los esfuerzos mundiales para erradicar la pobreza extrema y el hambre. La pandemia de COVID-19 podría casi duplicar el número de personas que padecen hambre aguda en el mundo, alcanzando 265 millones de afectados a finales de 2020, a menos que se tomen medidas rápidas, según ha advertido el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP). En este contexto, es vital que se mantenga la asistencia alimentaria, incluido el propio trabajo de WFP que ofrece un salvavidas a casi 100 millones de personas vulnerables en todo el mundo. La mayoría de las personas que sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 2019 se encontraban en países afectados por conflictos, cambio climático y crisis económicas. Diez países padecen las peores crisis alimentarias en 2019: Yemen, la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela, Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Sudán, Nigeria y Haití. Estos 10 países representan el 66 por ciento de la población total en situación de crisis o peor, 88 millones de personas. La COVID-19 es potencialmente catastrófica para millones de personas cuyas vidas ya penden de un hilo. Supone un golpe para millones de personas más que solo pueden comer si ganan un salario. Los confinamientos y la recesión económica mundial ya han diezmando sus ahorros. Solo se necesitaba un shock más, como la COVID-19, para llevarlos al límite. Debemos actuar colectivamente ahora para mitigar el impacto de esta catástrofe mundial. A finales de 2019, 135 millones de personas de 55 países y territorios sufrían de inseguridad alimentaria aguda. Además, en estos países 75 millones de niños sufrían de retraso en el crecimiento y 17 millones padecieron emaciación en 2019. Además, en 2019, 183 millones de personas fueron clasificadas en condiciones de "estrés", en la antesala del hambre aguda y en riesgo de caer en una situación de "crisis" o peor, si se enfrentan a una conmoción o a un factor estresante, como sucede con la pandemia de COVID-19. Más de la mitad (73 millones) de los 135 millones de personas a las que se refiere el informe viven en África; 43 millones en Oriente Medio y Asia; 18,5 millones en América Latina y el Caribe. La inseguridad alimentaria aguda se produce cuando la incapacidad de una persona para consumir alimentos adecuados pone en peligro inmediato su vida o sus medios de subsistencia. El aumento del hambre en el mundo causado por la COVID-19 hace que las crisis alimentarias de hoy no puedan tratarse una a una: una pandemia necesita una respuesta global y solidaria por parte de todos los países. Se requiere una respuesta que vaya más allá de lo sanitario: las consecuencias socioeconómicas de la pandemia pueden ser tan dañinas como la propia enfermedad para países sin mecanismos de protección y con la mitad de la población viviendo al día a causa de una economía informal. También por un potencial colapso en los sistemas de salud que pueda dificultar el tratamiento de otras enfermedades como la desnutrición aguda, especialmente en los países más vulnerables. El peligro de que las restricciones de movimientos puedan acabar afectando al envío de la ayuda humanitaria, de la que dependen hoy para sobrevivir más de 200 millones de personas. La ruptura de cadenas globales de valor e insumos, la imposibilidad de que migrantes recojan la cosecha, el cierre de plantas de procesamiento (ej cerdos y aves en USA) va a llevar indudablemente a una crisis alimentaria global. Los países exportadores privilegiarían sus mercados y los importadores quedarán a su suerte. El Programa Mundial de Alimentos, reveló que 821 millones de personas se van a la cama con hambre cada noche en todo el mundo y que si no nos preparamos ahora mismo para asegurar el acceso, evitar la falta de financiación y las interrupciones, podríamos

enfrentarnos a múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses. El hambre lleva al desespero social y esto conlleva a grandes conflictos sociales y en algunos casos, a la guerra interna o externa. La demanda de alimentos se ha disparado, incluso en los países más ricos de la Unión Europea. El reventón económico que provocaron las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus amplió a tasas sin precedentes el de los pobres de solemnidad que deben hacer una fila para que su ayuntamiento, entidades de beneficencia o alguna ONG les den una bolsa con algunos alimentos, refresco gratis, algo de ropa, y libros para los niños. Millones de europeos están viviendo la peor crisis que recuerdan. La demanda de alimentos gratis en Europa occidental creció en menos de dos meses entre un 25 y un 30 por ciento (Caritas). La ONG Médicos sin Fronteras ha puesto en marcha programas alimentarios en el Reino Unido y Alemania. En Italia, España, Francia y Bélgica, la demanda de ayuda alimentaria subió entre un 20 y un 25 por ciento y en el Reino Unido es aún mayor. En Milán, una de las ciudades más ricas de Europa, ya hay ocho centros de distribución de alimentos (Caritas). En Madrid y Barcelona, el número de personas cuya única comida viene de donaciones, aumentó en mes y medio un 40 por ciento; más de 100.000 personas en Madrid hacen fila por comida. En Ámsterdam, la demanda de alimentos gratuitos creció un 30 por ciento. Cinco millones de británicos con hijos menores de edad están en una situación de inseguridad alimentaria, el doble que hace un año (organización británica Food Foundation); eran 30 millones de personas en situación de grave pobreza en Europa y ha aumentado con posibilidad de llegar a 50 millones en pocos meses. América Latina registró en los últimos cinco años un aumento del hambre que podría afectar a un 9.5 por ciento de su población en 2030, un escenario severamente agravado por la COVID-19, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés). Pese a tener una capacidad más que suficiente para abastecer de alimentos a su población, el hambre afectó a cerca de 47,7 millones de personas en América Latina y el Caribe en 2019, o un 7.4 por ciento de habitantes. Esto se debe en primer lugar a un débil crecimiento económico y al problema de desigualdad estructural de nuestra región. El aumento en el hambre está estrechamente relacionado con la desaceleración económica general de la región. Las caídas en los precios de los productos básicos desde 2011 llevaron a un deterioro en las finanzas públicas de muchos países dependientes de la exportación de productos básicos en América Latina y el Caribe. La tasa de desempleo urbano alcanzó el 8.9% en 2016, lo que representa un aumento de 1.6 puntos porcentuales desde 2015. La disminución del PIB y el aumento del desempleo resultaron en ingresos más bajos para los hogares. Después de varios años de marcadas reducciones en la pobreza, el número de personas pobres aumentó de 166 millones a 175 millones entre 2013 y 2015, aumentando de 28.1% al 29.2% de la población. La región - donde la inseguridad alimentaria ha registrado el aumento más rápido del mundo- no solamente llegará al 2030 lejos de cumplir su meta de hambre cero, sino que el número de personas incapaces de consumir las calorías necesarias para una vida saludable ascenderá a 67 millones, cerca de 20 millones más que en 2019. El informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo 2020 (SOFI, por su sigla en inglés) se hizo antes que la pandemia de coronavirus golpeará con fuerza a la región, que ya venía con un débil desempeño en los cinco años previos, con un crecimiento de 0.4% en el periodo

2014-2019, el menor desde la década de 1950. La CEPAL estima que el coronavirus -con 13 millones de infectados a nivel mundial según conteos de Reuters- provocará una caída histórica de la economía de América Latina y el Caribe en 2020, que llevará a la peor crisis social de la región en décadas, con millones de nuevos pobres y desempleados. Uno de cada tres latinoamericanos y caribeños este año va a vivir en condición de pobreza, según proyección de la CEPAL, todos ellos amenazados por el hambre. Y es posible que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria. América Latina y el Caribe también es la región con el costo más alto para acceder a una dieta saludable, con un valor promedio de 3,98 dólares por día. Este monto es 3,3 veces más caro que lo que una persona bajo la línea de pobreza puede gastar en alimentos, según el informe hecho por la FAO junto al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la OMS, el WFP, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En relación a los países más afectados se encuentra Haití, un país con altos niveles de inseguridad alimentaria, Venezuela -donde el hambre ha aumentado en forma significativa en los últimos años- y Guatemala, El Salvador y Honduras, países pertenecientes al Corredor Seco en América Central. Estos países son los más expuestos, pero el agravamiento del hambre producto de la pandemia es algo que nos va a impactar a todos los países, no se salva nadie. América del Sur alberga la mayoría (55%) de las personas subalimentadas de la región, y el aumento observado en los últimos años se debe sobre todo al deterioro de la seguridad alimentaria en la República Bolivariana de Venezuela, donde la prevalencia de la subalimentación aumentó casi cuatro veces, de 6,4% en 2012-2014 a 21,2% en 2016-2018. El aumento significativo del hambre en Venezuela en los últimos años coincide con el período de recesión del país, cuando la inflación alcanzó aproximadamente 10 millones por ciento y el crecimiento del PIB real empeoró, pasando de -3.9% en 2014 a un estimado de -25% en 2018. En contraste, el porcentaje de subalimentación en América Central (6.1%) y el Caribe (18.4%), han estado disminuyendo desde 2013, a pesar de ser más alto que en América del Sur (5.5%). Durante los primeros 15 años de este siglo, América Latina y el Caribe redujo la subalimentación a la mitad. Pero desde 2014 el hambre ha ido aumentando (FAO). La FAO y la CEPAL recomiendan un plan de estrategia que involucra mantener el comercio mundial y la cadena que conforma el sistema de producción y distribución de alimentos, además de apoyar a quienes viven en situación de pobreza extrema o inseguridad alimentaria. Es importante mantener abierta la alimentación escolar -detenida con el cierre de escuelas-, establecer programas de transferencias de ingresos o tarjetas alimentarias. El esfuerzo debe ser liderado por los gobiernos pero que involucre a organizaciones sociales, empresas privadas, sectores vinculados con la ciencia y la tecnología, entre otros actores sociales. Es indispensable la acción de los gobiernos y de la sociedad civil, así existan las ollas comunes, comedores populares, las medidas tradicionales no van a ser suficiente, se necesita un esfuerzo mayor. Hay muchas personas que no tienen ingresos para comer siquiera las mínimas calorías para poder sostener su vida, su actividad física y otras 104 millones de personas que tampoco les alcanzan sus ingresos para alimentarse saludablemente. Según la FIES, el 9% de la población latinoamericana (sólo América del Sur y Central, ya que no hay datos disponibles para el Caribe) sufrió grave inseguridad alimentaria en 2018, mientras que el 21.9% sufrió una inseguridad alimentaria moderada. La tasa de inseguridad alimentaria severa alcanzó el

10.6% para América Central y el 8.3% para América del Sur. La inseguridad alimentaria moderada afectó al 20.9% de los centroamericanos en 2018 y al 22.3% de los sudamericanos. Actualmente, según el informe SOFI, 4 millones de niños menores de 5 años sufren sobrepeso (7.5% del total), 700 000 sufren desnutrición aguda (1.3%) y 4,8 millones sufren retraso en el crecimiento o desnutrición crónica (9%). Para los adultos la situación es aún más grave en términos de obesidad y sobrepeso. Hoy, por cada persona que sufre hambre, más de seis personas sufren sobrepeso. Es necesario un gran impulso regional contra todas las formas de malnutrición. El proceso de recuperación, será también una oportunidad para fortalecer la pequeña agricultura campesina y empresarial a mediana escala, que ayude a mitigar la hambruna que sufrirá la población marginada y los sectores más pobres. Para desarrollar una propuesta que permita impulsar políticas públicas de apoyo a la economía campesina. En algunos países, el campesinado no ha contado con la atención gubernamental que merece como motor estratégico de la economía. El principal sistema productor de alimentos se caracteriza por su vulnerabilidad estructural, con precariedad de recursos productivos, especialmente lo relativo al crédito, la propiedad de la tierra y buena calidad del suelo laborable; un mercado dominado por intermediarios; insuficiente oferta de bienes públicos rurales, tales como vías terciarias para transportar su producción hasta los mercados; una débil organización social donde pulula el individualismo, y en algunos países los conflictos y la violencia; una población urbana que prefiere alimentos importados, en su mayoría procesados e insuficiente institucionalidad en políticas públicas, que remueven los factores del atraso rural. Para fortalecer el sector rural y el sistema alimentario para mitigar la actual crisis se deben considerar acciones concretas para fortalecer la producción de alimentos de las economías familiares y de pequeña escala, y al mismo tiempo saldar la deuda social, económica y ambiental con la ruralidad, como escalar los vínculos directos entre productores y consumidores de las ciudades, mediante alianzas estratégicas y entre asociaciones y grupos de productores con organizaciones de consumidores en las ciudades, proceso este que debe contar con el apoyo de las instituciones gubernamentales y público-privadas; poner en marcha programas desatendidos por los gobiernos, entre los que se destacan las propuestas de desarrollo rural integral; frenar la invasión de los urbanizadores a predios productivos situados alrededor de las grandes ciudades y áreas conurbanas; promover y poner en marcha planes de seguridad alimentaria e impulsar la generación de empleos diversos en las áreas rurales; y fortalecer y ampliar los programas de compras públicas de alimentos a las economías campesinas. La alimentación de todos está en las manos de los campesinos. Es necesario que los gobiernos atiendan este llamado. El Banco Mundial advirtió que la pandemia del coronavirus y las políticas gubernamentales para evitar la propagación de la enfermedad podrían alterar las cadenas de suministro de alimentos, amenazando potencialmente la disponibilidad, incluso si los precios se mantienen estables en 2020. Los productos agrícolas están menos vinculados al crecimiento económico y solo registraron bajas menores en el primer trimestre de 2020, a excepción del caucho, que se utiliza en el transporte. Pero, aunque se espera que los precios se mantengan en general estables este año, dado que los niveles de producción y las existencias de la mayoría de los alimentos básicos se encuentran en niveles récord, los productores podrían enfrentar interrupciones

en el comercio y la distribución de insumos como fertilizantes, pesticidas y disponibilidad de mano de obra. Las interrupciones de las cadenas de suministro ya han afectado las exportaciones de productos perecederos de los mercados emergentes y de los países en desarrollo, como flores, frutas y verduras. Algunos países han puesto barreras al comercio. Estas medidas podrían generar problemas si se usan ampliamente.

TECNOLOGÍA E INCLUSIÓN DIGITAL

Nunca había estado la virtualidad tan al servicio de la humanidad como lo está siendo ahora. Nos adentramos en transformaciones más profundas como sociedad, pero para ello debemos enfrentar una nueva dimensión de la desigualdad social y la inclusión digital. A pesar de la importancia de las relaciones interpersonales, el mundo plantea nuevos retos desde la gestión social, la sostenibilidad ambiental y el empleo de la tecnología con múltiples oportunidades y soluciones para abrir canales de interacción a nivel global, permitiendo además el acceso de datos en tiempo real, tomar una foto o grabar un video a distancia, asistir a una reunión con personas en cualquier parte del mundo, prestar un servicio remoto, aprender en línea, recorrer un territorio con un dron, diligenciar un cuestionario o hacer una transferencia de dinero en cualquier momento. Todo esto puede ser ejecutado por medio de una aplicación en un dispositivo móvil con conexión a internet, permitiéndonos conocer de cerca con ayuda de la inteligencia artificial y datos, cualquier caracterización de un individuo y/o comunidad, análisis de su nivel socioeconómico, red de amigos, hobbies, movimientos, qué, cómo y dónde hace sus compras; encontrando grandes posibilidades para diseñar nuevas soluciones de negocio y desarrollo de proyectos de manera oportuna y personalizada. La posibilidad de contratar profesionales ubicados en cualquier lugar del mundo, y que estos trabajen en equipo, provocará un incremento de trabajadores freelance, del trabajo colaborativo y de los contratos para tareas puntuales. Ello traerá como consecuencia la necesidad de modificar la legislación laboral para adaptarla a este nuevo entorno. La confirmación del teletrabajo como posibilidad real y efectiva, las mejoras en las redes de comunicación y el incremento del tráfico va a propiciar que muchas personas –que se lo puedan permitir por las características de su trabajo– se trasladen de las grandes ciudades a entornos rurales, a segundas residencias o a ciudades más pequeñas. En cuanto al ámbito laboral, muchos trabajadores latinoamericanos se han visto forzados a trasladar su oficina al hogar, una tendencia que hasta ahora había sido poco implementada en Latinoamérica. Y es que las empresas de la región no se encuentran del todo preparadas para esta transición, ya sea por falta de infraestructura digital o por el desafío que implica restringir el contacto personal con los colaboradores y clientes. En Colombia, por ejemplo, las ciudades más pobladas son las que ostentan la mayor cantidad de personas que trabajan a distancia. Por otro lado, un estudio reciente revela que alrededor del 70% de los encuestados en Perú no tiene la posibilidad de trabajar o estudiar desde casa. Los negocios que hoy son nativos digitales están presentando un aumento en sus ganancias. Un ejemplo de transformación social es la cultura organizacional hacia la metodología de teletrabajo, ya no como el ejercicio de unos pocos, sino como una implementación colectiva, logrando una continuidad en los procesos institucionales y permitiendo darle un respiro al medio ambiente; con sus indudables ventajas respecto a cuestiones como

la mejora en la conciliación de la vida familiar, la eliminación de desplazamientos – y el consiguiente descenso de la contaminación– o la flexibilidad horaria, traerá como resultado la reducción del espacio de las oficinas y la consecuente disminución de los precios de venta y alquiler por la caída de la demanda. Pero también el descenso del número de viajes laborales y, por tanto, del uso de medios de transporte como aviones o trenes, y el acondicionamiento de los hogares para el trabajo en casa. El confinamiento y las consecuencias de la crisis sanitaria han acelerado extraordinariamente el proceso de digitalización de las empresas, de la administración pública, de la educación básica y superior y hasta de los ciudadanos particulares. Desde el ya establecido comercio electrónico, hemos pasado a las tramitaciones y gestiones remotas en servicios y en el sector público, la atención al cliente mediante bots, la implementación masiva de la robótica, el big data o la inteligencia artificial. Como consecuencia de todo ello y, en paralelo, las comunicaciones y la ciberseguridad experimentarán un desarrollo exponencial. En este sentido, las empresas tendrán que incluir modelos de negocio digitales y tecnologías para sobrevivir, darle un uso inteligente a la información para poder competir con las que ya están asumiendo el reto. Hasta ahora el marketing digital se encontraba muy focalizado en el comercio de productos. En el nuevo escenario, la venta online de servicios ha empezado a adquirir gran protagonismo. Y como canal de venta, se han consolidado las redes sociales. Así, las empresas que tradicionalmente han prestado sus servicios de forma presencial, ahora deben hacerlo a través de plataformas digitales. En el mundo globalizado, con redes sociales, con canales y plataformas digitales, a disposición de todos, una feria física o presencial resulta ahora más engorrosa para empresas y visitantes, porque el factor tiempo empieza a jugar a favor y en el balance económico las grandes inversiones en tecnología se compensan con los menores costos en transporte, viáticos y honorarios del personal de apoyo. El tecnológico, es el camino que tienen que explorar las empresas de ferias y eventos para sobrevivir a la mayor crisis económica del siglo y seguir cautivando el interés de clientes y consumidores. Con este contexto y el universo de datos cobra relevancia el concepto de inclusión digital y para materializarlo debemos trabajar por la democratización de la tecnología y la conectividad como un derecho, permitiendo que personas y comunidades tengan acceso a ellas de forma oportuna, incluyente y equitativa. En la medida en que las personas adopten este beneficio social, serán ellos mismos quienes contribuyan a la solución de sus necesidades, logrando transformaciones sostenibles en los territorios. Es una reinención organizacional basada en el distanciamiento social.

EDUCACIÓN

No se puede perder de vista que la gran reserva estratégica de la humanidad está en la educación, siendo un derecho humano fundamental y una herramienta privilegiada del desarrollo sustentable. Todos los educadores del mundo comparten la misma situación relacionada con medidas gubernamentales que restringen el regreso de estudiantes y profesores a las escuelas y universidades, durante un período largo de tiempo, aun indefinido. Sin aviso anticipado ni un plan, el sistema educativo, en todos sus niveles, tuvo que detenerse repentinamente. Durante este tiempo de confinamiento, los educadores

han tenido que buscar alternativas para poder continuar la comunicación con sus alumnos y poder desarrollar las actividades de enseñanza y formación. Las soluciones para atender la emergencia han sido distintas atendiendo al grado de preparación, los recursos y los medios de que dispongan los países. No obstante, las preocupaciones que expresan los educadores, independiente del país de origen, tienen un alto grado de coincidencia. Las herramientas virtuales serán utilizadas al máximo siendo de gran ayuda, pero se considera que aún tiene muchas limitaciones como la falta de capacitación y de difusión en muchos ambientes humanos. En muchas zonas no se podrán implementar lecciones virtuales, pues menos de la mitad de sus estudiantes tienen computador e internet en su casa. Una minoría de las instituciones educativas tiene experiencia en virtualidad. Del lado de los educadores, el principal reto será entender que el proceso educativo cambió y que es necesario innovar en estrategias didácticas, pedagógicas y de evaluación; además, muchos de ellos requerirán de procesos acelerados de alfabetización digital que les permita sacar mayor provecho de las bondades de estas tecnologías. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), 1.186.161.728 de estudiantes en edad escolar y universitaria en todo el mundo están viendo su educación afectada. Cerca del 70% de todos los alumnos siguen sus estudios de manera telemática o no lo hacen. Más de 177 millones de estudiantes en Iberoamérica han abandonado la escuela por esta crisis. En Latinoamérica, se ha logrado ampliar la cobertura educativa en los últimos años y prácticamente todos los niños de primaria y básica van a la escuela y cerca de 30 millones de estudiantes están matriculados en universidades iberoamericanas; sin embargo, su rendimiento en cuanto a calidad, equidad e inclusión son bajos. El grave problema de desigualdad en la región se perpetúa por las fallas del sistema educativo. Por lo pronto lo que se ha planteado como respuesta a la pandemia es compensarlo con la educación a distancia. Esto supone contar con conectividad en las escuelas, las plataformas digitales, la tutoría virtual, los paquetes de recursos y los repositorios de contenidos digitales. Sin embargo, el BID, en un informe reciente sobre las condiciones digitales de base que tiene América Latina y el Caribe encuentra que el único país que sale bien librado es Uruguay y que en general no se cuenta con las condiciones para brindar educación en línea a gran parte de la población estudiantil. Según datos del programa Pisa 2018 (Programme for International Student Assessment), en América Latina sólo el 33% de las escuelas poseen ancho de banda suficiente, para soportar la educación en línea y solo el 22% de las escuelas en contextos socio-demográficos vulnerables tendrían condiciones para soportar una educación en línea, mientras que el 52% de las escuelas favorecidas la podrían realizar de manera efectiva. México es el país de América Latina que cuenta con un mayor porcentaje de profesores (76%) con preparación técnica y pedagógica para asumir una docencia en línea, mientras la media de la región es del 58%. El consolidado de la región muestra que los docentes que trabajan en escuelas vulnerables tienen menor preparación que los docentes que trabajan en medios más favorecidos, con lo que la brecha no sólo es tecnológica y de disponibilidad de medios digitales, sino que se amplía atendiendo a la preparación de los profesores. En cuanto a la disponibilidad que tienen las familias para acceder a un computador, Uruguay y Chile (82%) son los únicos países de América Latina con un indicador cercano al promedio de los países de la OCDE

(89%). Es decir, las familias que pertenecen a medios más favorecidos tienen un nivel de acceso a la tecnología superior, mientras las familias vulnerables, el acceso a la tecnología está muy por debajo. En el medio rural, los resultados profundizan las desigualdades y la brecha tecnológica. Colombia, México y Perú tienen un bajo porcentaje de estudiantes rurales que tienen acceso a internet. En conclusión, la región no está preparada para asumir el aprendizaje en línea. Es decir, los niños y jóvenes se han quedado desatendidos. Además, en muchos hogares sus padres suelen tener bajo nivel de formación y la capacidad con pocas posibilidades que sean un apoyo educativo; son hogares en los que no hay libros ni elementos culturales, lo que profundiza la desigualdad. Los Gobiernos, deben lo más rápido posible, reformar los sistemas educativos para que sean inclusivos y que realmente impulsen la conectividad de todos los hogares más vulnerables. El caso de la educación superior es muy singular y tiene un impacto especial porque el 70% de ellos procede de familias sin formación universitaria, de clase media baja que esperan que esta formación les ofrezca mejores oportunidades de vida. La educación como institución de la sociedad ya venía rezagada desde hace muchísimo tiempo. La estructura de funcionamiento de la educación ha estado caminando rezagada a la par de los tiempos y sus transformaciones. El sistema educativo debió involucrar de una manera más oportuna y con un sentido de apertura las nuevas tecnologías. Ahora nos ha tocado sin la debida preparación. En medio de este desafiante escenario, plagado de cambios de toda índole, los aparatos educativos necesitan salir de su rigidez habitual y flexibilizarse para acoger toda suerte de iniciativas provenientes de una sociedad que, a lo largo de los últimos años, ha ganado en conocimiento y experiencia pero que enfrenta constante dificultad para poner sus iniciativas sobre la mesa estatal y ser empáticamente acogida por ministerios o secretarías territoriales de Educación, poseídas aún por mal entendimiento de la democracia o rezagos de autoritarismo que ya no tienen cabida. Los gobiernos deben defender conjuntamente ante entidades de inversión internacional –como el Fondo Monetario, el Banco Mundial– que tienen que aportar recursos. Se tienen que hacer esfuerzos políticos y económicos para evitar un impacto mayor en la educación. La inversión en América Latina el año pasado llegó a ser del 5.2%, es la región que más invierte en educación en el mundo. Eso demuestra que había un interés político por la situación. Ahora mismo hay un factor inevitable e indiscutible que es que la inversión va a ser en salud y también en asegurar rentas familiares. Es necesario, pero no debemos dejar atrás que la educación es garantía de futuro. En este momento la cooperación del FMI y la comunidad internacional tienen que ser conscientes de que hay que inyectar dinero, liquidez, en el sistema para poder salir de la crisis y compensar desigualdades.

ECOLOGÍA

El freno brusco de las actividades humanas tiene, paradójicamente, un gran beneficiado: el medio ambiente. El descenso de la cantidad de desplazamientos en vehículos a motor, la disminución de la producción industrial y el consumo se traduce en menos contaminación, aguas más limpias y cielos más claros, mejora en la calidad del aire, por una reducción drástica de las emisiones de dióxido de nitrógeno en varias ciudades y

disminución de los efectos negativos de algunas actividades extractivas de alto impacto como la minería ilegal, la tala, y la cacería de animales silvestres. Ha sido notoria la disminución en el ruido en las áreas urbanas y cambios en la calidad del agua de las fuentes hídricas. Ha disminuido la presión sobre algunas especies de fauna y flora, y algo muy importante es que ha bajado el tráfico ilegal y hay menos casos de atropellamiento de fauna en las vías. Algunos individuos de ciertas especies han aumentado su rango de acción debido a que los espacios que ocupamos los humanos en la cotidianidad ahora están más vacíos. El encerramiento humano preventivo, le ha servido de fuerte mensaje a la especie humana de que no está sola en el planeta y también de contundente lección de parte de la naturaleza, en el sentido que sólo es un componente más. Debemos contribuir al respeto por las demás manifestaciones de vida y de esa forma asegurar el equilibrio y la supervivencia de todas las especies en la tierra. El actual confinamiento es apenas un simulacro que nos prepara para la gran crisis que se nos viene, si no hacemos nada o si seguimos como vamos con el Cambio Global. Si esto no cambia, los desastres naturales-pandemias, incendios, huracanes, inundaciones van a continuar porque la temperatura en la Tierra sigue subiendo y porque hemos arruinado los ecosistemas. El cambio climático provoca movimientos y desplazamientos masivos de humanos y de otras especies animales; la vida animal y la humana, ambas con sus propios virus se acercan cada vez más y viajan juntos. Si no cambiamos vendrán más pandemias y desastres naturales. Resulta inconcebible e inconsecuente que, ante esta contundente realidad, que es condición para estar vivos, ensuciemos permanentemente y de manera creciente el aire que de todas maneras hemos de respirar sucio, contaminado y envenenado. Si queremos que esta recuperación sea sostenible, el mundo debe transformarse para ser más resiliente, entonces tenemos que hacer todo lo que podamos para promover una 'recuperación verde"', en suma, una recuperación respetuosa con los ecosistemas, enmarcada dentro de las políticas de desarrollo sostenible. Se debe volver a producir, y hacerlo con energías limpias y sostenibles

¿QUÉ LECCIONES DEBEMOS APRENDER DE ESTA PANDEMIA?

La primera es que las pandemias son reales y deberíamos empezar a prepararnos para la próxima pandemia. Cuando la gente comience a viajar nuevamente, los viajeros van a expandir la pandemia alrededor del mundo. Y la otra lección es que necesitamos buenos gobiernos. Necesitamos gobiernos que se preparen y que respondan a tiempo. El rol de cualquier presidente o primer ministro es enfrentar los problemas. Quizás la gente habrá aprendido esa lección. Necesitamos a alguien que sea un verdadero administrador al mando. Hay otra narrativa que es preocupante, que es la de los robots reemplazando los empleos de humanos. La inteligencia artificial podría en buena parte contribuir al aumento de la desigualdad. Nuestras vidas parecen estar dominadas por la tecnología, ya no salimos de nuestras casas, hablamos a través de las redes y las redes sociales se están convirtiendo en una realidad virtual con vínculos más fuertes. Se espera que podría haber algunas mejoras en programas sociales; nos ha quedado claro cuán vulnerable es la gente que vive cerca del límite. Podría haber mejoras en el sistema de redistribución, progresividad en el sistema de impuestos en el mundo y los servicios que se ofrecen al público, como el sistema de salud y la educación. El sistema de salud es particularmente

importante porque estamos conscientes de sus deficiencias y sabemos que las instalaciones no son adecuadas para enfrentar esta crisis. También se ha vuelto a valorar de alguna manera el rol del Estado como proveedor de salud y el Estado como una pieza clave en momentos de crisis. Ante esta situación inédita, se requieren “políticas extraordinarias” por parte de los gobiernos de todo el mundo, con una especial atención a los más vulnerables. Las políticas de recuperación de hoy perfilarán las perspectivas económicas y sociales en la próxima década. Los gobiernos deben aprovechar esta oportunidad para diseñar una economía más justa y sostenible, mejorando la competitividad y las regulaciones, modernizando los impuestos, el gasto y la protección social. Hay necesidad de ayudar a empresas y trabajadores de sectores muy afectados en el tránsito a nuevas ocupaciones, lo que requerirá el paso de ayudas generalizadas a unos apoyos más focalizados que permitan la reestructuración de empresas y la formación de trabajadores, así como una protección social para los más vulnerables. No se trata de volver a lo normal de antes, lo normal es lo que nos ha traído hasta aquí. Esta crisis es una oportunidad para que los gobiernos impulsen un crecimiento más resiliente, inclusivo y sostenible y que, a la vez, responda también al desafío climático que también sigue siendo una amenaza mayor.

LECTURAS RECOMENDADAS

Baldwin, R (2020). It's not exponential: an economist's view of the epidemiological curve. VoxEU.org, 12 de marzo. <https://voxeu.org/article/supply-side-matters-guns-versus-butter-covid-style>

Baldwin, R y B Weder di Mauro (2020). Economics in the Time of COVID-19, CEPR Press. VoxEO.org. 6 de marzo. <https://voxeu.org/article/economics-time-covid-19-new-ebook>

Barria C. Coronavirus: los 10 países que más han gastado en enfrentar la pandemia (y cómo se ubican los de América Latina). BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-52686453>

Bénassy-Quéré, A, A Boot, A Fatás, M Fratzscher, C Fuest, F Giavazzi, R Marimon, P Martin, J Pisani-Ferry, L Reichlin, D Schoenmaker, P Teles and B. Weder di Mauro (2020), “COVID-19: A proposal for a Covid Credit Line”, VoxEU.org, 21 March. <https://voxeu.org/article/proposal-covid-credit-line>

Bofinger, P, S Dulline, G Felbermayr, M Huther, M Schularick, J Sudekum and C Trebesch (2020), “To avoid economic disaster, Europe must demonstrate financial solidarity”, NewStatesman, 21 March. <https://www.newstatesman.com/world/europe/2020/03/avoid-economic-disaster-europe-must-demonstrate-financial-solidarity>

Brooks R, Ribakova E, Lanau S, Fortun J, Hilgenstock B, EconomistCapital Flows Report – Sudden Stop in Emerging Markets. Institute of International Finance, April 9,2020. https://www.iif.com/Portals/0/Files/content/2_IIF2020_April_CFR.pdf

Brown G, Summers LH. El alivio a la deuda es el mayor alivio para la pandemia. Proyect Syndicate. 2020. <https://www.project-syndicate.org/commentary/debt-relief-most-effective-covid19-assistance-by-gordon-brown-and-lawrence-h-summers-2020-04/spanish>

Calvo G., Izquierdo, A. and Talvi, E. (2003): “Sudden Stops, the Real Exchange Rate, and Fiscal Sustainability: Argentina’s Lessons”. NBER Working Paper No. 9828

Capital Economics (2020). EZ facing more than 10% quarterly slump in GDP, 17 de marzo. <https://www.capitaleconomics.com/publications/european-economics/european-economics-update/ez-facing-more-than-10-quarterly-slump-in-gdp/>

Cepal. Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid>

CIMA. Portal de estadísticas educativas del BID. 2020. <https://www.iadb.org/es/sectores/educacion/cima/inicio>

COMUNICADO CONJUNTO UE/FAO/OCHA/UNICEF/USAID/PMA. El Informe mundial sobre las crisis alimentarias revela su magnitud, mientras la COVID-19 plantea nuevas amenazas para los países vulnerables. <http://www.fao.org/news/story/pt/item/1271897/icode/>

De Bolle M. El coronavirus y la economía: "El virus del nacionalismo económico nos puede hacer caer en la trampa en la que caímos en los años 30". Peterson Institute for International Economics (PIIE), en Washington, DC. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-52580989>

Dinero. Colombia será el país en Oede? con más desempleo en 2020 por covid-19, ibero 2020 <https://www.dinero.com/pais/articulo/desempleo-en-colombia-sera-el-pais-de-la-ocde-mas-afectado-por-covid-19/291687>

Eichengreen B. Managing the coming global debt crisis. Project syndicate; 2020. <https://www.project-syndicate.org/commentary/managing-coming-global-debt-crisis-by-barry-eichengreen-2020-05?barrier=accesspaylog>

Erce, A, A Garcia Pascual and R Marimon (2020), "The ESM can finance the COVID fight now", VoxEU.org, 06 April. <https://voxeu.org/article/esm-can-finance-covid-fight-now>

Giraldo, Gina (2018). Gobernanza global, justicia social. Medellín. Eafit. Disponible en: <http://www.eafit.edu.co/cultura-eafit/fondo-editorial/colecciones/Paginas/gobernanza-global-y-justicia-social.aspx>

Grund, S, L Guttenberg and C Odendahl (2020), "Sharing the fiscal burden of the crisis: A Pandemic Solidarity Instrument for the EU 05 April 2020. <https://voxeu.org/article/pandemic-solidarity-instrument-eu>

Gutiérrez P, Clarke S. Coronavirus world map: which countries have the most Covid-19 cases and deaths? <https://www.theguardian.com/world/2020/jun/10/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths>

Kenneth Rogoff. Las crisis financieras en la historia. De dónde venimos y cómo estamos. <http://www.eexcellence.es/index.php/entrevistas/con-talento/executive-excellence-116>

Klut A. This pandemic is an opportunity for radical simplification. Bloomberg opinión. 2020. <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-25/coronavirus-pandemic-is-an-opportunity-for-radical-simplification>

Kose MA, Nagle K, Ohnsorge F, Sugawara N. Global waves of debt - cause and consequences <https://www.worldbank.org/en/research/publication/waves-of-debt>

Lepan N. World Economic Forum. Historia visual de las pandemias. Disponible en: <https://es.weforum.org/agenda/2020/03/una-historia-visual-de-las-pandemias/>

Martin MS. Diferencias entre equidad e igualdad 2013. El blog del especialista. <https://especialistaenigualdad.blogspot.com/2013/10/diferencias-entre-equidad-e-igualdad.html>

OIT. Noticias. Crisis del COVID-19: Llamada de advertencia para fortalecer los sistemas de protección social. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742692/lang-es/index.htm

Pineda E - Pessino C, Rasteletti A. BID. Política y gestión fiscal durante la pandemia y la post-pandemia en América Latina y el Caribe. <https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/politica-y-gestion-fiscal-durante-la-pandemia-y-la-post-pandemia-en-america-latina-y-el-caribe/>

Proyecto educar 2050. Primer foro virtual de equidad y calidad educativa. El Covid 19 y su impacto en la educación. 2020. https://educar2050.org.ar/wp/wp-content/uploads/2020/06/Primer-Foro-virtual-de-equidad-y-calidad-educativa_EducAR2050_Mayo2020.pdf

Reinhart C, Rogoff K. Suspend Emerging and Developing Economies' Debt Payments. Apr. 13, 2020. Project syndicate. <https://www.belfercenter.org/publication/suspend-emerging-and-developing-economies-debt-payments>

Reinhart C. No se veía una crisis en la economía mundial así desde la Depresión del 30. Clarin. https://www.clarin.com/economia/carmen-reinhart-veia-crisis-economia-mundial-depresion-30-_0_nKw65tFRZ.html

Reinhart. C. Esta vez es realmente diferente. 2020. Project syndicate. <https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-crisis-has-no-economic-precedent-by-carmen-reinhart-2020-03/spanish>

Rodrik D. ¿El COVID-19 reconstruirá al mundo? Project syndicate. <https://www.project-syndicate.org/commentary/will-covid19-remake-the-world-by-dani-rodrik-2020-04/spanish>

Rogoff K. Parece más una guerra que una recesión. Perfil 2020. <https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/parece-mas-una-guerra-que-una-recesion.phtml>

Salvador R. La recuperación post coronavirus será gradual. La vanguardia 2020. <https://www.lavanguardia.com/economia/20200403/48280345019/recuperacion-economica-coronavirus-covid-19-deloitte.html>

Shiller R. No existe una pandemia, sino dos. Red informativa Sol. 2020. <https://redinformativasol.com/archivos/4615>

The Global Report on Food Crises 2020. <http://www.fightfoodcrises.net/food-crisis-and-covid-19/en/>

Walker R. Why most post pandemic predictions will be totally wrong. Marker. 2020. <https://marker.medium.com/why-most-post-pandemic-predictions-will-be-totally-wrong-4e1bc1c71614>

Wilkinson D, Tellez L. ¿Cuál podría ser el impacto de la COVID-19 en la crisis climática?. Foreign Policy in Focus. <https://www.hrw.org/es/news/2020/04/22/cual-podria-ser-el-impacto-de-la-covid-19-en-la-crisis-climatica#>
